

RECURSO DE REVISION

EXPEDIENTE: TEEG-REV-10/2015.

ACTOR: Mario Alonso Gallaga Porras en su carácter de representante del Partido Acción Nacional.

ÓRGANO RESPONSABLE: Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

TERCERO INTERESADO: Coalición "Juntos para Servir".

MAGISTRADO PONENTE: GERARDO RAFAEL ARZOLA SILVA.

RESOLUCIÓN.- Guanajuato, Guanajuato; resolución del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, correspondiente al día 4 del mes de mayo del año 2015.

VISTO.- Para resolver los autos de recurso de revisión, expediente citado al rubro, promovido por Mario Alonso Gallaga Porras en su carácter de representante del Partido Acción Nacional, en contra del acuerdo **CGIEEG/033/2015**, dictado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el día 4 de abril de 2015, mediante el cual se aprobó el registro de las planillas de candidatos, postulados por la coalición "Juntos para Servir" conformada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, para integrar los ayuntamientos de Apaseo el Grande, Atarjea, Celaya, Coroneo, Guanajuato, Irapuato, León, Manuel Doblado, Pénjamo, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, y Tierra Blanca en la elección a celebrarse el 7 de junio del año en curso.

RESULTANDO:

PRIMERO.- Antecedentes. Como aspectos relevantes del caso, se citan las circunstancias siguientes:

1.- Convocatoria de la autoridad electoral local para registrar candidaturas.- En la sesión extraordinaria del 5 de septiembre de 2014, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, aprobó la convocatoria a elecciones ordinarias para diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y la renovación de los 46 ayuntamientos del Estado de Guanajuato, la cual fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 148, segunda parte, de fecha 16 de septiembre del mismo año.

2.- Solicitud de registro.- Con base en lo anterior, la coalición “Juntos para Servir” conformada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza solicitó, ante la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el registro de planillas para integrar los ayuntamientos de los siguientes municipios: Apaseo el Grande, Atarjea, Celaya, Coroneo, Guanajuato, Irapuato, León, Manuel Doblado, Pénjamo, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, y Tierra Blanca.

3.- Resolución impugnada.- Con fecha 4 de abril de 2015, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato emitió el acuerdo **CGIEEG/033/2015**, autorizando el registro de las planillas de candidatos señaladas, que propuso la coalición “Juntos para Servir”.

SEGUNDO.- Substanciación del recurso de revisión.

a) Recepción. En fecha 9 de abril de 2015, a las 20:47 49s veinte horas, con cuarenta y siete minutos y cuarenta y nueve segundos; se recibió en la sede de este Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, el escrito signado por el ciudadano Mario Alonso Gallaga Porras, quien se ostentó como representante del Partido Acción Nacional, mediante el cual interpone recurso de revisión, en contra del acuerdo **CGIEEG/33/2015**, emitido el 4 de abril del año en curso, por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, donde se aprobó el registro de diversas planillas de candidatos propuesta por la coalición “Juntos para Servir” integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.

b) Turno. En observancia a lo dispuesto por los artículos 163, fracción I, 166 fracción III, 397 y 398 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, mediante auto dictado en fecha 11 de abril de 2015, el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, acordó integrar el expediente respectivo con el número **TEEG-REV-10/2015** y turnarlo a la tercera ponencia a cargo del Magistrado Gerardo Rafael Arzola Silva, para su sustanciación y formulación del proyecto de resolución correspondiente.

c) Admisión. Por auto correspondiente, se admitió a trámite el recurso de revisión, interpuesto por Mario Alonso Gallaga Porras, con el carácter de representante del Partido Acción Nacional, lo anterior con fundamento en los artículos 166 fracción III, 382, 384, 396 fracción IV, 397 y 398 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

d) Trámite y substanciación. Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 400 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, se ordenó comunicar la interposición del recurso de revisión al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, como órgano responsable, y a la coalición “Juntos para Servir” compuesta por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, considerados como terceros interesados, haciéndoles saber que contaban con un plazo de 48 horas, para realizar las alegaciones o aportaran las pruebas que estimaran pertinentes, así como para que señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad Capital.

Al respecto, mediante auto dictado el 16 de abril del año 2015, se tuvo a la autoridad responsable, compareciendo en la presente causa y presentando diversas constancias documentales solicitadas.

En el mismo proveído indicado, se tuvo a los representantes de los institutos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, apersonándose en la presente causa, rindiendo sus correspondientes alegaciones y se admitieron las pruebas documentales procedentes.

Además, se tuvo a los institutos políticos terceros interesados señalando domicilio, para recibir las notificaciones que hubieran de efectuarse en forma personal.

e) Cierre de instrucción. Con fecha treinta de abril de la presente anualidad, se declaró cerrada la etapa de instrucción del

procedimiento, quedando los autos en estado de dictar resolución, misma que ahora se emite.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Jurisdicción y competencia. El pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato ejerce jurisdicción y es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, base VI y 116, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 31 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato 150, 163 fracción I, 166 fracciones II y III, 381 al 384, 396, 398 y 400 de Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato; así como los numerales 1, 6, 10 fracciones I y XVIII, 13, 14, 22, 24 fracciones II y III, 84, 86, y 92 al 95 del Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.

SEGUNDO.- Requisitos de procedibilidad. Por ser de orden público, este órgano plenario procede al análisis de los requisitos de procedibilidad del medio de impugnación planteado, a efecto de determinar si en la especie se reúnen los requisitos mínimos para su estudio, previstos en los artículos 382, 383, 384 y 396 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato o, en su caso, se actualice alguna causa de improcedencia o sobreseimiento que imposibilite a esta autoridad electoral, el pronunciamiento de una resolución de fondo.

Oportunidad. El medio de impugnación hecho valer por el ciudadano Mario Alonso Gallaga Porras, ostentándose como representante del Partido Acción Nacional, fue promovido en tiempo, en virtud de que en el presente caso el recurrente se inconformó con el acuerdo de fecha 4 de abril del año 2015, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y su recurso fue presentado el día 9 de abril del año en curso.

Por tanto, con independencia de la fecha en que el instituto político recurrente, haya sido notificado del acto impugnado o haya tenido conocimiento del mismo, es evidente que interpuso su recurso dentro de los 5 días, que establece el artículo 397 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guanajuato.

Forma. El escrito de interposición del recurso de revisión, reúne de manera esencial los requisitos formales que establece el artículo 382 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, para su trámite, en razón a que se formuló por escrito y contiene el nombre, domicilio y firma autógrafa de quien promueve; se identifica el acto impugnado y el organismo electoral responsable; se mencionan los antecedentes y hechos motivo de la impugnación, los preceptos legales que se consideran violados; así como los agravios que, a su decir, le causa la determinación combatida, siendo además posible con la narración de hechos que sustentan el medio de impugnación; y, en su caso, el carácter del tercero interesado.

Legitimación y personería. Sobre el interés jurídico, basta que en la especie el instituto político impugnante participe en el proceso electivo atinente, para que le asista el interés jurídico necesario para impugnar el acto en el que la autoridad electoral concede el registro a la formula de candidatos presentada por un diverso partido, por lo cual, en el presente caso se actualiza, la legitimación e interés jurídico del actor, necesarios para la promoción del presente recurso.

Corroborado lo expresado, la jurisprudencia número **S3ELJ 07/2002**, sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dice:

INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO. La esencia del artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral implica que, por regla general, el interés jurídico procesal se surte, si en la demanda se aduce la infracción de algún derecho sustancial del actor y a la vez éste hace ver que la intervención del órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación de esa conculcación, mediante la formulación de algún planteamiento tendente a obtener el dictado de una sentencia, que tenga el efecto de revocar o modificar el acto o la resolución reclamados, que producirá la consiguiente restitución al demandante en el goce del pretendido derecho político electoral violado. Si se satisface lo anterior, es claro que el actor tiene interés jurídico procesal para promover el medio de impugnación, lo cual conducirá a que se examine el mérito de la pretensión. Cuestión distinta es la demostración de la conculcación del derecho que se dice violado, lo que en todo caso corresponde al estudio del fondo del asunto.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-068/2001 y acumulado. Raymundo Mora Aguilar y Alejandro Santillana Ánimas. 13 de septiembre de 2001. Unanimidad de 5 votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-363/2001. Partido Acción Nacional. 22 de diciembre de 2001. Unanimidad de 6 votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-371/2001. Partido Acción Nacional. 22 de diciembre de 2001. Unanimidad de 6 votos.

La Sala Superior en sesión celebrada el veintiuno de febrero de dos mil dos, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Por otra parte, desde el proveído de radicación, se tuvo al ciudadano Mario Alonso Gallaga Porrás por acreditando la personería con que se ostenta, como representante suplente del Partido Acción Nacional, ello con la certificación de fecha 21 de

marzo de 2015, expedida por el licenciado Juan Carlos Cano Martínez, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en la que se especifica que el recurrente cuenta con la representación del partido señalado, ante la autoridad administrativa electoral del Estado.

En efecto, la constancia presentada es eficaz para establecer, que el disidente goza de la representación que ostenta, atento a lo señalado en la jurisprudencia de rubro: **PERSONERIA DE LOS REPRESENTANTES REGISTRADOS FORMALMENTE ANTE LOS ORGANOS ELECTORALES. ACREDITAMIENTO (LEGISLACION DE COLIMA)**, que también se citó en el proveído inicial del presente recurso.

Definitividad. El requisito atinente, contemplado en el artículo 385 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, se surte en la especie, dado que, conforme a la normatividad del partido y a la legislación electoral local aplicable, no procede ningún medio o recurso previo a través del cual pudiera ser combatida la resolución que ahora se cuestiona.

Por tanto, en razón de que se encuentran satisfechos los requisitos para la procedencia de este recurso de revisión, y toda vez que en la especie este órgano colegiado no advierte que se actualice alguna causal de improcedencia o sobreseimiento, de acuerdo a lo previsto por los artículos 382, 419, 420 y 421 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado

de Guanajuato, procede realizar el estudio de fondo de la controversia planteada, a la luz de los agravios formulados.

TERCERO.- Acuerdo Impugnado.- El acuerdo impugnado, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en fecha 4 de abril del año en curso, es del tenor literal siguiente:

CGIEEG/033/2015

En la sesión especial efectuada el cuatro de abril de dos mil quince, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, emitió el siguiente:

Acuerdo mediante el cual se registran las planillas de candidatos a integrar los ayuntamientos de Apaseo el Grande, Atarjea, Celaya, Coroneo, Guanajuato, Irapuato, León, Manuel Doblado, Pénjamo, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende y Tierra Blanca, postuladas por la coalición flexible “JUNTOS PARA SERVIR”, para contender en la elección ordinaria del siete de junio del presente año.

RESULTANDO:

PRIMERO. Que mediante decreto número 176 de la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 102, tercera parte, de fecha veintisiete de junio de dos mil catorce, se reformaron, adicionaron y derogaron diversos artículos de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.

SEGUNDO. Que mediante decreto número 180 de la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 102, cuarta parte, de fecha veintisiete de junio de dos mil catorce, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

TERCERO. Que en la sesión extraordinaria de fecha cinco de septiembre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado aprobó la convocatoria a elecciones ordinarias para diputados al Congreso del Estado por los principios de mayoría relativa y representación proporcional y la renovación de los cuarenta y seis ayuntamientos, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 148, segunda parte, de fecha dieciséis de septiembre de dos mil catorce.

CUARTO. Que en la sesión extraordinaria del diecisiete de septiembre de dos mil catorce, mediante acuerdo CG/056/2014, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 154, tercera parte, de fecha veintiséis de septiembre del dos mil catorce, el Consejo General acordó la procedencia del registro del convenio de coalición flexible suscrito por los institutos políticos Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, para postular candidatos a integrantes de ayuntamientos del estado de Guanajuato, en los municipios de Abasolo, Celaya, Comonfort, Coroneo, Irapuato, León, Manuel Doblado, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Santiago Maravatío, Tarimoro, Tierra Blanca, Victoria y Xichú, y de diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa en los distritos II, III, IV, V, VI, VII, XI, XII, XV y XVI.

QUINTO. Que en la sesión extraordinaria del diecinueve de marzo de dos mil quince, mediante acuerdo CGIEEG/022/2015, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 50, segunda parte, de fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, el Consejo General aprobó las modificaciones al convenio de coalición celebrado por los institutos políticos Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.

En el punto segundo del acuerdo mencionado, se estableció que la coalición podrá postular candidatos y, en su caso, contender en las elecciones municipales de Apaseo el Grande, Atarjea, Celaya, Coroneo, Guanajuato, Irapuato, León, Manuel Doblado, Pénjamo, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende y Tierra Blanca, y en la elección III, IV, V,VI, VII (de León), XI (de Irapuato), y XV y XVI (de Celaya), y bajo los términos pactados en el convenio de coalición modificado.

SEXTO. Que el día veintiséis de marzo de dos mil quince, la coalición flexible conformada por los institutos políticos Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza para contender en la elección ordinaria del siete de junio del presente año, presentó ante la Secretaría Ejecutiva en funciones de Secretaría del Consejo General, la solicitud de registro de las planillas de candidatos a miembros de los ayuntamientos, acompañando las documentales referidas en el considerando séptimo, para participar en la elección de Apaseo el Grande, Atarjea, Celaya, Coroneo, Guanajuato, Irapuato, León, Manuel Doblado, Pénjamo, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende y Tierra Blanca.

SÉPTIMO. Que el día dos de abril de dos mil quince, la coalición flexible conformada por los institutos políticos Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, presentó un escrito ante la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, mediante el cual se comunica que la denominación de la coalición flexible será "JUNTOS PARA SERVIR".

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 31, párrafo segundo, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, la organización de las elecciones locales es una función estatal que se realizará a través del organismo público electoral local y por el Instituto Nacional Electoral, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley.

SEGUNDO. Que el artículo 77, párrafos primero y segundo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, establece que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, y que gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la Constitución del Estado y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. De igual manera, se señala que será profesional en su desempeño y se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. Asimismo, se estipula que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la Constitución Federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución del Estado y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

TERCERO. Que el artículo 17, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución del Estado, dispone que en las candidaturas a diputado y regidor, las fórmulas de propietario y suplente deberán ser del mismo género, tratándose de candidatos bajo el principio de representación proporcional, las listas se integrarán de manera alternada entre los géneros.

CUARTO. Que el artículo 81 de la ley electoral local, señala que el Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto Electoral del Estado, al que corresponde la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales de carácter estatal.

QUINTO. Que el artículo 82, párrafo primero, del citado ordenamiento, indica que el Consejo General estará integrado por un consejero presidente y seis consejeros electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos políticos con registro nacional y estatal, quienes concurrirán a las sesiones solo con derecho a voz.

SEXTO. Que conforme a lo previsto en los artículos 92, fracción XXV, y 188, penúltimo párrafo, de la ley comicial local, es atribución del Consejo General registrar indistintamente a los consejos municipales electorales, las planillas de candidatos a miembros de los ayuntamientos.

SÉPTIMO. Que el artículo 188, fracción IV, del citado ordenamiento, establece que el registro de candidaturas de ayuntamientos es del veinte al veintiséis de marzo, por los consejos municipales electorales correspondientes.

OCTAVO. Que el artículo 189, fracción III, de la ley electoral local, dispone que las candidaturas para integrar ayuntamientos serán registradas por planillas completas que estarán formadas por

los candidatos a presidente y síndico o síndicos y regidores, propietarios y suplentes, que correspondan.

NOVENO. Que el artículo 191, párrafo sexto, de la ley comicial local, establece que al noveno día del vencimiento de los plazos a que se refiere el artículo 188, los órganos electorales que correspondan celebrarán una sesión cuyo único objeto será registrar las candidaturas que procedan. El Consejo General comunicará de inmediato a los consejos distritales y municipales, las determinaciones que haya tomado sobre el registro de las listas de candidatos por el principio de representación proporcional, así como de los registros supletorios que haya realizado.

DÉCIMO. Que el artículo 184 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, expresa que las candidaturas a diputados y a integrantes de ayuntamiento, se registrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente, serán consideradas, fórmulas y candidatos, separadamente, salvo para efectos de votación. En el párrafo segundo, se señala que los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para diputados al Congreso del Estado y de regidores de los ayuntamientos.

UNDÉCIMO. Que el artículo 185 de la ley electoral local, indica que de la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como integrantes del ayuntamiento que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y la Ley de Instituciones y Procedimientos para el Estado de Guanajuato. Asimismo, en el párrafo segundo, se estipula que las listas de diputados y de ayuntamientos por el principio de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar la lista.

DUODÉCIMO. Que la coalición flexible “JUNTOS PARA SERVIR”, presentó dentro del término establecido por el artículo 188, fracción IV, de la ley electoral local, solicitudes de registro de las planillas de candidatos a 4 miembros de los ayuntamientos de Apaseo el Grande, Atarjea, Celaya, Coroneo, Guanajuato, Irapuato, León, Manuel Doblado, Pénjamo, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende y Tierra Blanca, ante la Secretaría Ejecutiva en funciones de Secretaría del Consejo General, como se advierte del sello oficial de recepción que obra en las solicitudes respectivas. A efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 110 y 111 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 11, 12, 189 fracción III, y 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, en términos de lo indicado en el artículo 191 de ese mismo ordenamiento, se procede al estudio de los documentos presentados respecto de las planillas postuladas por la coalición flexible “JUNTOS PARA SERVIR”, para los ayuntamientos señalados en el párrafo que antecede.

1. Apaseo el Grande.

La coalición flexible “JUNTOS PARA SERVIR”, presentó solicitud de registro de candidatos para contender en el municipio de Apaseo el Grande, en la que se contiene los datos de la fórmula de mayoría conformada por los candidatos a presidente municipal, y síndicos propietario y suplente. Asimismo, presentó las listas de candidatos a regidores por el principio de representación proporcional de cada uno de los partidos coaligados.

Del análisis de la solicitud presentada por la coalición flexible “JUNTOS PARA SERVIR” para contender en el municipio de Apaseo el Grande, se desprende que en la misma obran los datos de los ciudadanos cuyo registros se solicitan como candidatos a presidente municipal, síndicos y regidores, propietarios y suplentes, consistentes en: apellidos paterno, materno y nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, domicilio y tiempo de residencia en el mismo, ocupación, clave de su credencial para votar con fotografía, y el cargo para el que se les postula.

Asimismo, en la solicitud se hace la manifestación de que los candidatos fueron electos de conformidad con las normas estatutarias de los institutos políticos Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza en términos del convenio de coalición, con lo que se colma el requisito establecido en el inciso e) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley electoral del Estado. Asimismo, se cumple lo ordenado en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución del Estado y en el párrafo segundo del artículo 185 de la referida ley electoral, pues las listas de candidatos a regidores se integra por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y se

alternan las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar las listas.

A la solicitud se acompañaron los siguientes documentos, correspondientes a cada uno de los ciudadanos integrantes de la planilla y de las listas de los partidos coaligados:

1. Declaración de aceptación de la candidatura;
2. Copia certificada del acta de nacimiento;
3. Constancia de tiempo de residencia;
4. Copia de la credencial para votar con fotografía, y
5. Constancia de inscripción en el padrón electoral.

De las declaraciones de aceptación de las candidaturas se desprende que en cada caso los ciudadanos aceptan las candidaturas para las cuales son postulados, encontrándose todas ellas firmadas de manera autógrafa, por lo que resultan útiles para cumplir el requisito establecido en el inciso a) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley comicial local.

En cuanto a las copias certificadas de las actas de nacimiento, se advierte que las mismas fueron expedidas por los fedatarios públicos facultados para ello y corresponden a cada uno de los ciudadanos postulados como candidatos, por lo que se cumple el requisito fijado en el inciso b) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley electoral de la entidad. Además, de las fechas de nacimiento plasmadas en cada una de las actas, se obtiene que los ciudadanos postulados cumplen con el requisito de edad necesario para ser candidatos, esto es, tener por lo menos veintiún años cumplidos al día de la elección, con lo que se colma el requisito de elegibilidad establecido en la fracción II del artículo 110 de la Constitución Política local.

En lo tocante a las constancias de tiempo de residencia, se advierte que las mismas fueron expedidas, en cada caso, por el servidor público que resulta ser la autoridad municipal competente para expedir tales documentos, esto de conformidad con lo estipulado en la fracción VIII del artículo 128 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Asimismo, del análisis de cada una de las constancias adjuntadas a las solicitudes, se desprende que los ciudadanos cuyos registros se solicitan cuentan con al menos dos años de residir en el municipio en donde deban desempeñar el cargo. De esa guisa, con las constancias adjuntadas a las solicitudes se cumple cabalmente el requisito señalado en el inciso c) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley electoral estatal, pues con las mismas se acredita el tiempo de residencia de cada uno de los candidatos postulados, además de que se demuestra que los candidatos cumplen con los requisitos de elegibilidad contenidos en las 6 fracciones I y III del artículo 110 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; habida cuenta que de acuerdo a lo establecido en los artículos 20 y 21 de la Constitución Política del Estado, la calidad de guanajuatense se adquiere por nacimiento o por vecindad, precisándose que son guanajuatenses por vecindad los mexicanos que residan en su territorio durante un periodo no menor de dos años.

Por lo que hace a las copias de las credenciales para votar con fotografía, el partido político postulante exhibe copia de las mismas, de las cuales se advierte que fueron expedidas por el ahora Instituto Nacional Electoral y corresponden a cada uno de los ciudadanos postulados como candidatos. En lo concerniente a las constancias de inscripción en el padrón electoral, se desprende que las mismas fueron expedidas por los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral con facultades para ello, y que corresponden a cada uno de los ciudadanos postulados como candidatos, pues los datos contenidos en las mismas coinciden con los que se desprenden de las copias de las respectivas credenciales para votar con fotografía. En tal virtud, a juicio de esta autoridad electoral, tales documentos son útiles para acreditar el cumplimiento del requisito establecido en el inciso d) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley comicial local, además de que con los mismos se demuestra el cumplimiento del requisito de elegibilidad precisado en la fracción I, del artículo 11 de la ley electoral estatal.

En lo tocante a los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 111 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, y en la fracción II del artículo 11 de la ley comicial local, es menester precisar que por tratarse de requisitos de carácter negativo, debe presumirse que se satisfacen, al no resultar apegado a la lógica jurídica que se deban probar los hechos negativos.

Lo anterior tiene sustento en la Tesis LXXVI/2001 aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del siguiente texto y rubro:

ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN. En las Constituciones Federal y locales, así como en las legislaciones electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido negativo; ejemplo de los primeros son: 1. ser ciudadano mexicano por nacimiento; 2. tener una edad determinada; 3. ser originario del Estado o Municipio en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe del mismo noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policía; d) no ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados por los propios candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la exhibición de los documentos atinentes; en cambio, por lo que se refiere a los requisitos de carácter negativo, en principio, debe presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos negativos. Consecuentemente, corresponderá a quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia.

De igual manera, se observa lo dispuesto en el artículo 12 de la ley comicial local pues en la planilla que se analiza a ninguna persona se le intenta registrar como candidato a distintos cargos de elección popular para el presente proceso electoral, ni se pide el registro de algún candidato registrado o en vías de ser registrado por otro partido político o coalición.

También se advierte que la planilla y listas cuyo registro se pide, se encuentran completas, pues de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, el ayuntamiento de Apaseo el Grande se integra, además del Presidente Municipal, con un síndico y ocho regidores, propietarios y suplentes, lo que coincide con el registro solicitado. En tal virtud, se colma el requisito establecido en la fracción III del artículo 189 de la ley comicial local, que estipula que las candidaturas para integrar ayuntamientos serán registradas por planillas completas que estarán formadas por los candidatos a presidente y síndico o síndicos y regidores, propietarios y suplentes, que correspondan.

Así, del análisis de la documentación presentada, se desprende que los candidatos postulados satisfacen los requisitos de elegibilidad señalados tanto en los artículos 110 y 111 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, como en los artículos 11 y 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y se colman los requerimientos establecidos en los artículos 189, fracción III y 190 de la propia ley.

Ahora bien, el párrafo final del artículo 190 de la ley electoral local establece que en caso de que el candidato sea postulado en coalición, se deberá cumplir además con lo establecido en la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la ley comicial local, por lo que al tratarse en el presente caso de la solicitud de registro de candidatos postulados por una coalición, debe verificarse el cumplimiento de tales requisitos, lo que se hará en su conjunto al final del presente considerando.

2. Atarjea.

La coalición flexible "JUNTOS PARA SERVIR", presentó solicitud de registro de candidatos para contender en el municipio de Atarjea, en la que se contiene los datos de la fórmula de mayoría conformada por los candidatos a presidente municipal, y síndicos propietario y suplente. Asimismo, presentó las listas de candidatos a regidores por el principio de representación proporcional de cada uno de los partidos coaligados.

Del análisis de la solicitud presentada por la coalición "JUNTOS PARA SERVIR" para contender en el municipio de Atarjea, se desprende que en la misma obran los datos de los ciudadanos cuyo registros se solicitan como candidatos a presidente municipal, síndicos y regidores, propietarios y suplentes, consistentes en: apellidos paterno, materno y nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, domicilio y tiempo de residencia en el mismo, ocupación, clave de su credencial para votar con fotografía, y el cargo para el que se les postula.

Asimismo, en la solicitud se hace la manifestación de que los candidatos fueron electos de conformidad con las normas estatutarias de los institutos políticos Partido Revolucionario

Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza en términos del convenio de coalición, con lo que se colma el requisito establecido en el inciso e) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley electoral del Estado. Asimismo, se cumple lo ordenado en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución del Estado y en el párrafo segundo del artículo 185 de la referida ley electoral, pues las listas de candidatos a regidores se integra por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y se alternan las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar las listas.

A la solicitud se acompañaron los siguientes documentos, correspondientes a cada uno de los ciudadanos integrantes de la planilla y de las listas de los partidos coaligados:

1. Declaración de aceptación de la candidatura;
2. Copia certificada del acta de nacimiento;
3. Constancia de tiempo de residencia;
4. Copia de la credencial para votar con fotografía, y
5. Constancia de inscripción en el padrón electoral.

De las declaraciones de aceptación de las candidaturas se desprende que en cada caso los ciudadanos aceptan las candidaturas para las cuales son postulados, encontrándose todas ellas firmadas de manera autógrafa, por lo que resultan útiles para cumplir el requisito establecido en el inciso a) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley comicial local.

En cuanto a las copias certificadas de las actas de nacimiento, se advierte que las mismas fueron expedidas por los fedatarios públicos facultados para ello y corresponden a cada uno de los ciudadanos postulados como candidatos, por lo que se cumple el requisito fijado en el inciso b) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley electoral de la entidad. Además, de las fechas de nacimiento plasmadas en cada una de las actas, se obtiene que los ciudadanos postulados cumplen con el requisito de edad necesario para ser candidatos, esto es, tener por lo menos veintiún años cumplidos al día de la elección, con lo que se colma el requisito de elegibilidad establecido en la fracción II del artículo 110 de la Constitución Política local.

En lo tocante a las constancias de tiempo de residencia, se advierte que las mismas fueron expedidas, en cada caso, por el servidor público que resulta ser la autoridad municipal competente para expedir tales documentos, esto de conformidad con lo estipulado en la fracción VIII del artículo 128 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Asimismo, del análisis de cada una de las constancias adjuntadas a las solicitudes, se desprende que los ciudadanos cuyos registros se solicitan cuentan con al menos dos años de residir en el municipio en donde deban desempeñar el cargo. De esa guisa, con las constancias adjuntadas a las solicitudes se cumple cabalmente el requisito señalado en el inciso c) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley electoral estatal, pues con las mismas se acredita el tiempo de residencia de cada uno de los candidatos postulados, además de que se demuestra que los candidatos cumplen con los requisitos de elegibilidad contenidos en las fracciones I y III del artículo 110 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; habida cuenta que de acuerdo a lo establecido en los artículos 20 y 21 de la Constitución Política del Estado, la calidad de guanajuatense se adquiere por nacimiento o por vecindad, precisándose que son guanajuatenses por vecindad los mexicanos que residan en su territorio durante un periodo no menor de dos años.

Por lo que hace a las copias de las credenciales para votar con fotografía, el partido político postulante exhibe copia de las mismas, de las cuales se advierte que fueron expedidas por el ahora Instituto Nacional Electoral y corresponden a cada uno de los ciudadanos postulados como candidatos. En lo concerniente a las constancias de inscripción en el padrón electoral, se desprende que las mismas fueron expedidas por los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral con facultades para ello, y que corresponden a cada uno de los ciudadanos postulados como candidatos, pues los datos contenidos en las mismas coinciden con los que se desprenden de las copias de las respectivas credenciales para votar con fotografía. En tal virtud, a juicio de esta autoridad electoral, tales documentos son útiles para acreditar el cumplimiento del requisito establecido en el inciso d) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley comicial local, además de que con los mismos se demuestra el cumplimiento del requisito de elegibilidad precisado en la fracción I, del artículo 11 de la ley electoral estatal.

En lo tocante a los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 111 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, y en la fracción II del artículo 11 de la ley comicial local, es menester precisar que por tratarse de requisitos de carácter negativo, debe presumirse que se satisfacen, al no resultar apegado a la lógica jurídica que se deban probar los hechos negativos.

Lo anterior tiene sustento en la Tesis LXXVI/2001 aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del siguiente texto y rubro:

ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN. En las Constituciones Federal y locales, así como en las legislaciones electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido negativo; ejemplo de los primeros son: 1. ser ciudadano mexicano por nacimiento; 2. tener una edad determinada; 3. ser originario del Estado o Municipio en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe del mismo noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policía; d) no ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados por los propios candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la exhibición de los documentos atinentes; en cambio, por lo que se refiere a los requisitos de carácter negativo, en principio, debe presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos negativos. Consecuentemente, corresponderá a quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia.

De igual manera, se observa lo dispuesto en el artículo 12 de la ley comicial local pues en la planilla que se analiza a ninguna persona se le intenta registrar como candidato a distintos cargos de elección popular para el presente proceso electoral, ni se pide el registro de algún candidato registrado o en vías de ser registrado por otro partido político o coalición.

También se advierte que la planilla y listas cuyo registro se pide, se encuentran completas, pues de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, el ayuntamiento de Atarjea se integra, además del Presidente Municipal, con un síndico y ocho regidores, propietarios y suplentes, lo que coincide con el 11 registro solicitado. En tal virtud, se colma el requisito establecido en la fracción III del artículo 189 de la ley comicial local, que estipula que las candidaturas para integrar ayuntamientos serán registradas por planillas completas que estarán formadas por los candidatos a presidente y síndico o síndicos y regidores, propietarios y suplentes, que correspondan.

Así, del análisis de la documentación presentada, se desprende que los candidatos postulados satisfacen los requisitos de elegibilidad señalados tanto en los artículos 110 y 111 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, como en los artículos 11 y 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y se colman los requerimientos establecidos en los artículos 189, fracción III y 190 de la propia ley.

Ahora bien, el párrafo final del artículo 190 de la ley electoral local establece que en caso de que el candidato sea postulado en coalición, se deberá cumplir además con lo establecido en la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la ley comicial local, por lo que al tratarse en el presente caso de la solicitud de registro de candidatos postulados por una coalición, debe verificarse el cumplimiento de tales requisitos, lo que se hará en su conjunto al final del presente considerando.

3. Celaya.

La coalición flexible "JUNTOS PARA SERVIR", presentó solicitud de registro de candidatos para contender en el municipio de Celaya, en la que se contiene los datos de la fórmula de mayoría conformada por los candidatos a presidente municipal, y síndicos propietario y suplente. Asimismo, presentó las listas de candidatos a regidores por el principio de representación proporcional de cada uno de los partidos coaligados.

Del análisis de la solicitud presentada por la coalición flexible la coalición flexible "JUNTOS PARA SERVIR" para contender en el municipio de Celaya, se desprende que en la misma obran los datos de los ciudadanos cuyo registros se solicitan como candidatos a presidente municipal,

síndicos y regidores, propietarios y suplentes, consistentes en: apellidos paterno, materno y nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, domicilio y tiempo de residencia en el mismo, ocupación, clave de su credencial para votar con fotografía, y el cargo para el que se les postula.

Asimismo, en la solicitud se hace la manifestación de que los candidatos fueron electos de conformidad con las normas estatutarias de los institutos políticos Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza en términos del convenio de coalición, con lo que se colma el requisito establecido en el inciso e) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley electoral del Estado. Asimismo, se cumple lo ordenado en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución del Estado y en el párrafo segundo del artículo 185 de la referida ley electoral, pues las listas de candidatos a regidores se integra por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y se alternan las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar las listas.

A la solicitud se acompañaron los siguientes documentos, correspondientes a cada uno de los ciudadanos integrantes de la planilla y de las listas de los partidos coaligados:

1. Declaración de aceptación de la candidatura;
2. Copia certificada del acta de nacimiento;
3. Constancia de tiempo de residencia;
4. Copia de la credencial para votar con fotografía, y
5. Constancia de inscripción en el padrón electoral.

De las declaraciones de aceptación de las candidaturas se desprende que en cada caso los ciudadanos aceptan las candidaturas para las cuales son postulados, encontrándose todas ellas firmadas de manera autógrafa, por lo que resultan útiles para cumplir el requisito establecido en el inciso a) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley comicial local.

En cuanto a las copias certificadas de las actas de nacimiento, se advierte que las mismas fueron expedidas por los fedatarios públicos facultados para ello y corresponden a cada uno de los ciudadanos postulados como candidatos, por lo que se cumple el requisito fijado en el inciso b) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley electoral de la entidad. Además, de las fechas de nacimiento plasmadas en cada una de las actas, se obtiene que los ciudadanos postulados cumplen con el requisito de edad necesario para ser candidatos, esto es, tener por lo menos veintiún años cumplidos al día de la elección, con lo que se colma el requisito de elegibilidad establecido en la fracción II del artículo 110 de la Constitución Política local.

En lo tocante a las constancias de tiempo de residencia, se advierte que las mismas fueron expedidas, en cada caso, por el servidor público que resulta ser la autoridad municipal competente para expedir tales documentos, esto de conformidad con lo estipulado en la fracción VIII del artículo 128 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Asimismo, del análisis de 13 cada una de las constancias adjuntadas a las solicitudes, se desprende que los ciudadanos cuyos registros se solicitan cuentan con al menos dos años de residir en el municipio en donde deban desempeñar el cargo. De esa guisa, con las constancias adjuntadas a las solicitudes se cumple cabalmente el requisito señalado en el inciso c) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley electoral estatal, pues con las mismas se acredita el tiempo de residencia de cada uno de los candidatos postulados, además de que se demuestra que los candidatos cumplen con los requisitos de elegibilidad contenidos en las fracciones I y III del artículo 110 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; habida cuenta que de acuerdo a lo establecido en los artículos 20 y 21 de la Constitución Política del Estado, la calidad de guanajuatense se adquiere por nacimiento o por vecindad, precisándose que son guanajuatenses por vecindad los mexicanos que residan en su territorio durante un periodo no menor de dos años.

Por lo que hace a las copias de las credenciales para votar con fotografía, el partido político postulante exhibe copia de las mismas, de las cuales se advierte que fueron expedidas por el ahora Instituto Nacional Electoral y corresponden a cada uno de los ciudadanos postulados como candidatos. En lo concerniente a las constancias de inscripción en el padrón electoral, se desprende que las mismas fueron expedidas por los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral con facultades para ello, y que corresponden a cada uno de los ciudadanos postulados como candidatos, pues los datos contenidos en las mismas coinciden con los que se desprenden de las copias de las respectivas credenciales para votar con fotografía. En tal virtud, a juicio de

esta autoridad electoral, tales documentos son útiles para acreditar el cumplimiento del requisito establecido en el inciso d) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley comicial local, además de que con los mismos se demuestra el cumplimiento del requisito de elegibilidad precisado en la fracción I, del artículo 11 de la ley electoral estatal.

En lo tocante a los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 111 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, y en la fracción II del artículo 11 de la ley comicial local, es menester precisar que por tratarse de requisitos de carácter negativo, debe presumirse que se satisfacen, al no resultar apegado a la lógica jurídica que se deban probar los hechos negativos.

Lo anterior tiene sustento en la Tesis LXXVI/2001 aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del siguiente texto y rubro:

ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN. En las Constituciones Federal y locales, así como en las legislaciones electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos 14 requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido negativo; ejemplo de los primeros son: 1. ser ciudadano mexicano por nacimiento; 2. tener una edad determinada; 3. ser originario del Estado o Municipio en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe del mismo noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policía; d) no ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados por los propios candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la exhibición de los documentos atinentes; en cambio, por lo que se refiere a los requisitos de carácter negativo, en principio, debe presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos negativos. Consecuentemente, corresponderá a quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia.

De igual manera, se observa lo dispuesto en el artículo 12 de la ley comicial local pues en la planilla que se analiza a ninguna persona se le intenta registrar como candidato a distintos cargos de elección popular para el presente proceso electoral, ni se pide el registro de algún candidato registrado o en vías de ser registrado por otro partido político o coalición.

También se advierte que la planilla y listas cuyo registro se pide, se encuentran completas, pues de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, el ayuntamiento de Celaya se integra, además del Presidente Municipal, con dos síndicos y doce regidores, propietarios y suplentes, lo que coincide con el registro solicitado. En tal virtud, se colma el requisito establecido en la fracción III del artículo 189 de la ley comicial local, que estipula que las candidaturas para integrar ayuntamientos serán registradas por planillas completas que estarán formadas por los candidatos a presidente y síndico o síndicos y regidores, propietarios y suplentes, que correspondan.

Así, del análisis de la documentación presentada, se desprende que los candidatos postulados satisfacen los requisitos de elegibilidad señalados tanto en los artículos 110 y 111 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, como en los artículos 11 y 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y se colman los requerimientos establecidos en los artículos 189, fracción III y 190 de la propia ley.

Ahora bien, el párrafo final del artículo 190 de la ley electoral local establece que en caso de que el candidato sea postulado en coalición, se deberá cumplir además con lo establecido en la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la ley comicial local, por lo que al tratarse en el presente caso de la solicitud de registro de candidatos postulados por una coalición, debe verificarse el cumplimiento de tales requisitos, lo que se hará en su conjunto al final del presente considerando.

4. Coroneo.

La coalición flexible "JUNTOS PARA SERVIR", presentó solicitud de registro de candidatos para contender en el municipio de Coroneo, en la que se contiene los datos de la fórmula de mayoría conformada por los candidatos a presidente municipal, y síndicos propietario y suplente.

Asimismo, presentó las listas de candidatos a regidores por el principio de representación proporcional de cada uno de los partidos coaligados.

Del análisis de la solicitud presentada por la coalición flexible La coalición flexible "JUNTOS PARA SERVIR" para contender en el municipio de Coroneo, se desprende que en la misma obran los datos de los ciudadanos cuyo registros se solicitan como candidatos a presidente municipal, síndicos y regidores, propietarios y suplentes, consistentes en: apellidos paterno, materno y nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, domicilio y tiempo de residencia en el mismo, ocupación, clave de su credencial para votar con fotografía, y el cargo para el que se les postula.

Asimismo, en la solicitud se hace la manifestación de que los candidatos fueron electos de conformidad con las normas estatutarias de los institutos políticos Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza en términos del convenio de coalición, con lo que se colma el requisito establecido en el inciso e) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley electoral del Estado. Asimismo, se cumple lo ordenado en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución del Estado y en el párrafo segundo del artículo 185 de la referida ley electoral, pues las listas de candidatos a regidores se integra por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y se alternan las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar las listas.

A la solicitud se acompañaron los siguientes documentos, correspondientes a cada uno de los ciudadanos integrantes de la planilla y de las listas de los partidos coaligados:

1. Declaración de aceptación de la candidatura;
2. Copia certificada del acta de nacimiento;
3. Constancia de tiempo de residencia;
4. Copia de la credencial para votar con fotografía, y
5. Constancia de inscripción en el padrón electoral.

De las declaraciones de aceptación de las candidaturas se desprende que en cada caso los ciudadanos aceptan las candidaturas para las cuales son postulados, encontrándose todas ellas firmadas de manera autógrafa, por lo que resultan útiles para cumplir el requisito establecido en el inciso a) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley comicial local.

En cuanto a las copias certificadas de las actas de nacimiento, se advierte que las mismas fueron expedidas por los fedatarios públicos facultados para ello y corresponden a cada uno de los ciudadanos postulados como candidatos, por lo que se cumple el requisito fijado en el inciso b) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley electoral de la entidad. Además, de las fechas de nacimiento plasmadas en cada una de las actas, se obtiene que los ciudadanos postulados cumplen con el requisito de edad necesario para ser candidatos, esto es, tener por lo menos veintiún años cumplidos al día de la elección, con lo que se colma el requisito de elegibilidad establecido en la fracción II del artículo 110 de la Constitución Política local.

En lo tocante a las constancias de tiempo de residencia, se advierte que las mismas fueron expedidas, en cada caso, por el servidor público que resulta ser la autoridad municipal competente para expedir tales documentos, esto de conformidad con lo estipulado en la fracción VIII del artículo 128 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Asimismo, del análisis de cada una de las constancias adjuntadas a las solicitudes, se desprende que los ciudadanos cuyos registros se solicitan cuentan con al menos dos años de residir en el municipio en donde deban desempeñar el cargo. De esa guisa, con las constancias adjuntadas a las solicitudes se cumple cabalmente el requisito señalado en el inciso c) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley electoral estatal, pues con las mismas se acredita el tiempo de residencia de cada uno de los candidatos postulados, además de que se demuestra que los candidatos cumplen con los requisitos de elegibilidad contenidos en las fracciones I y III del artículo 110 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; habida cuenta que de acuerdo a lo establecido en los artículos 20 y 21 de la Constitución Política del Estado, la calidad de guanajuatense se adquiere por nacimiento o por vecindad, precisándose que son guanajuatenses por vecindad los mexicanos que residan en su territorio durante un periodo no menor de dos años.

Por lo que hace a las copias de las credenciales para votar con fotografía, el partido político postulante exhibe copia de las mismas, de las cuales se advierte que fueron expedidas por el ahora Instituto Nacional Electoral y corresponden a cada uno de los ciudadanos postulados como candidatos. En lo concerniente a las constancias de inscripción en el padrón electoral, se desprende que las mismas fueron expedidas por los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral con facultades para ello, y que corresponden a cada uno de los ciudadanos postulados como candidatos, pues los datos contenidos en las mismas coinciden con los que se desprenden de las copias de las respectivas credenciales para votar con fotografía. En tal virtud, a juicio de esta autoridad electoral, tales documentos son útiles para acreditar el cumplimiento del requisito establecido en el inciso d) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley comicial local, además de que con los mismos se demuestra el cumplimiento del requisito de elegibilidad precisado en la fracción I, del artículo 11 de la ley electoral estatal.

En lo tocante a los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 111 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, y en la fracción II del artículo 11 de la ley comicial local, es menester precisar que por tratarse de requisitos de carácter negativo, debe presumirse que se satisfacen, al no resultar apegado a la lógica jurídica que se deban probar los hechos negativos.

Lo anterior tiene sustento en la Tesis LXXVI/2001 aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del siguiente texto y rubro:

ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN. En las Constituciones Federal y locales, así como en las legislaciones electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido negativo; ejemplo de los primeros son: 1. ser ciudadano mexicano por nacimiento; 2. tener una edad determinada; 3. ser originario del Estado o Municipio en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe del mismo noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policía; d) no ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados por los propios candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la exhibición de los documentos atinentes; en cambio, por lo que se refiere a los requisitos de carácter negativo, en principio, debe presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos negativos. Consecuentemente, corresponderá a quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia.

De igual manera, se observa lo dispuesto en el artículo 12 de la ley comicial local pues en la planilla que se analiza a ninguna persona se le intenta registrar como candidato a distintos cargos de elección popular para el presente proceso electoral, ni se pide el registro de algún candidato registrado o en vías de ser registrado por otro partido político o coalición.

También se advierte que la planilla y listas cuyo registro se pide, se encuentran completas, pues de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, el ayuntamiento de Coroneo se integra, además del Presidente Municipal, con un síndico y ocho regidores, propietarios y suplentes, lo que coincide con el registro solicitado. En tal virtud, se colma el requisito establecido en la fracción III del artículo 189 de la ley comicial local, que estipula que las candidaturas para integrar ayuntamientos serán registradas por planillas completas que estarán formadas por los candidatos a presidente y síndico o síndicos y regidores, propietarios y suplentes, que correspondan.

Así, del análisis de la documentación presentada, se desprende que los candidatos postulados satisfacen los requisitos de elegibilidad señalados tanto en los artículos 110 y 111 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, como en los artículos 11 y 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y se colman los requerimientos establecidos en los artículos 189, fracción III y 190 de la propia ley.

Ahora bien, el párrafo final del artículo 190 de la ley electoral local establece que en caso de que el candidato sea postulado en coalición, se deberá cumplir además con lo establecido en la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la ley comicial local, por lo que al tratarse en el presente caso de la solicitud de registro de

candidatos postulados por una coalición, debe verificarse el cumplimiento de tales requisitos, lo que se hará en su conjunto al final del presente considerando.

5. Guanajuato.

La coalición flexible "JUNTOS PARA SERVIR", presentó solicitud de registro de candidatos para contender en el municipio de Guanajuato, en la que se contiene los datos de la fórmula de mayoría conformada por los candidatos a presidente municipal, y síndicos propietario y suplente. Asimismo, presentó las listas de candidatos a regidores por el principio de representación proporcional de cada uno de los partidos coaligados.

Del análisis de la solicitud presentada por la coalición flexible "JUNTOS PARA SERVIR" para contender en el municipio de Guanajuato, se desprende que en la misma obran los datos de los ciudadanos cuyo registros se solicitan como candidatos a presidente municipal, síndicos y regidores, propietarios y suplentes, consistentes en: apellidos paterno, materno y nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, domicilio y tiempo de residencia en el mismo, ocupación, clave de su credencial para votar con fotografía, y el cargo para el que se les postula.

Asimismo, en la solicitud se hace la manifestación de que los candidatos fueron electos de conformidad con las normas estatutarias de los institutos políticos Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza en términos del convenio de coalición, con lo que se colma el requisito establecido en el inciso e) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley electoral del Estado. Asimismo, se cumple lo ordenado en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución del Estado y en el párrafo segundo del artículo 185 de la referida ley electoral, pues las listas de candidatos a regidores se integra por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y se alternan las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar las listas.

A la solicitud se acompañaron los siguientes documentos, correspondientes a cada uno de los ciudadanos integrantes de la planilla y de las listas de los partidos coaligados:

1. Declaración de aceptación de la candidatura;
2. Copia certificada del acta de nacimiento;
3. Constancia de tiempo de residencia;
4. Copia de la credencial para votar con fotografía, y
5. Constancia de inscripción en el padrón electoral.

De las declaraciones de aceptación de las candidaturas se desprende que en cada caso los ciudadanos aceptan las candidaturas para las cuales son postulados, encontrándose todas ellas firmadas de manera autógrafa, por lo que resultan útiles para cumplir el requisito establecido en el inciso a) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley comicial local.

En cuanto a las copias certificadas de las actas de nacimiento, se advierte que las mismas fueron expedidas por los fedatarios públicos facultados para ello y corresponden a cada uno de los ciudadanos postulados como candidatos, por lo que se cumple el requisito fijado en el inciso b) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley electoral de la entidad. Además, de las fechas de nacimiento plasmadas en cada una de las actas, se obtiene que los ciudadanos postulados cumplen con el requisito de edad necesario para ser candidatos, esto es, tener por lo menos veintiún años cumplidos al día de la elección, con lo que se colma el requisito de elegibilidad establecido en la fracción II del artículo 110 de la Constitución Política local.

En lo tocante a las constancias de tiempo de residencia, se advierte que las mismas fueron expedidas, en cada caso, por el servidor público que resulta ser la autoridad municipal competente para expedir tales documentos, esto de conformidad con lo estipulado en la fracción VIII del artículo 128 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Asimismo, del análisis de cada una de las constancias adjuntadas a las solicitudes, se desprende que los ciudadanos cuyos registros se solicitan cuentan con al menos dos años de residir en el municipio en donde deban desempeñar el cargo. De esa guisa, con las constancias adjuntadas a las solicitudes se cumple cabalmente el requisito señalado en el inciso c) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley electoral estatal, pues con las mismas se acredita el tiempo de residencia de cada uno de los candidatos postulados, además de que se demuestra que los candidatos cumplen con los requisitos de elegibilidad contenidos en las 6 fracciones I y III del artículo 110 de

la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; habida cuenta que de acuerdo a lo establecido en los artículos 20 y 21 de la Constitución Política del Estado, la calidad de guanajuatense se adquiere por nacimiento o por vecindad, precisándose que son guanajuatenses por vecindad los mexicanos que residan en su territorio durante un periodo no menor de dos años.

Por lo que hace a las copias de las credenciales para votar con fotografía, el partido político postulante exhibe copia de las mismas, de las cuales se advierte que fueron expedidas por el ahora Instituto Nacional Electoral y corresponden a cada uno de los ciudadanos postulados como candidatos. En lo concerniente a las constancias de inscripción en el padrón electoral, se desprende que las mismas fueron expedidas por los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral con facultades para ello, y que corresponden a cada uno de los ciudadanos postulados como candidatos, pues los datos contenidos en las mismas coinciden con los que se desprenden de las copias de las respectivas credenciales para votar con fotografía. En tal virtud, a juicio de esta autoridad electoral, tales documentos son útiles para acreditar el cumplimiento del requisito establecido en el inciso d) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley comicial local, además de que con los mismos se demuestra el cumplimiento del requisito de elegibilidad precisado en la fracción I, del artículo 11 de la ley electoral estatal.

En lo tocante a los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 111 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, y en la fracción II del artículo 11 de la ley comicial local, es menester precisar que por tratarse de requisitos de carácter negativo, debe presumirse que se satisfacen, al no resultar apegado a la lógica jurídica que se deban probar los hechos negativos.

Lo anterior tiene sustento en la Tesis LXXVI/2001 aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del siguiente texto y rubro:

ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN. En las Constituciones Federal y locales, así como en las legislaciones electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido negativo; ejemplo de los primeros son: 1. ser ciudadano mexicano por nacimiento; 2. tener una edad determinada; 3. ser originario del Estado o Municipio en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe del mismo noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policía; d) no ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados por los propios candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la exhibición de los documentos atinentes; en cambio, por lo que se refiere a los requisitos de carácter negativo, en principio, debe presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos negativos. Consecuentemente, corresponderá a quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia.

De igual manera, se observa lo dispuesto en el artículo 12 de la ley comicial local pues en la planilla que se analiza a ninguna persona se le intenta registrar como candidato a distintos cargos de elección popular para el presente proceso electoral, ni se pide el registro de algún candidato registrado o en vías de ser registrado por otro partido político o coalición.

También se advierte que la planilla y listas cuyo registro se pide, se encuentran completas, pues de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, el ayuntamiento de Apaseo el Grande se integra, además del Presidente Municipal, con un síndico y ocho regidores, propietarios y suplentes, lo que coincide con el registro solicitado. En tal virtud, se colma el requisito establecido en la fracción III del artículo 189 de la ley comicial local, que estipula que las candidaturas para integrar ayuntamientos serán registradas por planillas completas que estarán formadas por los candidatos a presidente y síndico o síndicos y regidores, propietarios y suplentes, que correspondan.

Así, del análisis de la documentación presentada, se desprende que los candidatos postulados satisfacen los requisitos de elegibilidad señalados tanto en los artículos 110 y 111 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, como en los artículos 11 y 12 de la Ley de

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y se colman los requerimientos establecidos en los artículos 189, fracción III y 190 de la propia ley.

Ahora bien, el párrafo final del artículo 190 de la ley electoral local establece que en caso de que el candidato sea postulado en coalición, se deberá cumplir además con lo establecido en la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la ley comicial local, por lo que al tratarse en el presente caso de la solicitud de registro de candidatos postulados por una coalición, debe verificarse el cumplimiento de tales requisitos, lo que se hará en su conjunto al final del presente considerando.

6. Irapuato.

La coalición flexible “JUNTOS PARA SERVIR”, presentó solicitud de registro de candidatos para contender en el municipio de Irapuato, en la que se contiene los datos de la fórmula de mayoría conformada por los candidatos a presidente municipal, y síndicos propietario y suplente. Asimismo, presentó las listas de candidatos a regidores por el principio de representación proporcional de cada uno de los partidos coaligados.

Del análisis de la solicitud presentada por la coalición flexible “JUNTOS PARA SERVIR” para contender en el municipio de Irapuato, se desprende que en la misma obran los datos de los ciudadanos cuyo registros se solicitan como candidatos a presidente municipal, síndicos y regidores, propietarios y suplentes, consistentes en: apellidos paterno, materno y nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, domicilio y tiempo de residencia en el mismo, ocupación, clave de su credencial para votar con fotografía, y el cargo para el que se les postula.

Asimismo, en la solicitud se hace la manifestación de que los candidatos fueron electos de conformidad con las normas estatutarias de los institutos políticos Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza en términos del convenio de coalición, con lo que se colma el requisito establecido en el inciso e) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley electoral del Estado. Asimismo, se cumple lo ordenado en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución del Estado y en el párrafo segundo del artículo 185 de la referida ley electoral, pues las listas de candidatos a regidores se integra por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y se alternan las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar las listas.

A la solicitud se acompañaron los siguientes documentos, correspondientes a cada uno de los ciudadanos integrantes de la planilla y de las listas de los partidos coaligados:

1. Declaración de aceptación de la candidatura;
2. Copia certificada del acta de nacimiento;
3. Constancia de tiempo de residencia;
4. Copia de la credencial para votar con fotografía, y
5. Constancia de inscripción en el padrón electoral.

De las declaraciones de aceptación de las candidaturas se desprende que en cada caso los ciudadanos aceptan las candidaturas para las cuales son postulados, encontrándose todas ellas firmadas de manera autógrafa, por lo que resultan útiles para cumplir el requisito establecido en el inciso a) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley comicial local.

En cuanto a las copias certificadas de las actas de nacimiento, se advierte que las mismas fueron expedidas por los fedatarios públicos facultados para ello y corresponden a cada uno de los ciudadanos postulados como candidatos, por lo que se cumple el requisito fijado en el inciso b) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley electoral de la entidad. Además, de las fechas de nacimiento plasmadas en cada una de las actas, se obtiene que los ciudadanos postulados cumplen con el requisito de edad necesario para ser candidatos, esto es, tener por lo menos veintiún años cumplidos al día de la elección, con lo que se colma el requisito de elegibilidad establecido en la fracción II del artículo 110 de la Constitución Política local.

En lo tocante a las constancias de tiempo de residencia, se advierte que las mismas fueron expedidas, en cada caso, por el servidor público que resulta ser la autoridad municipal competente para expedir tales documentos, esto de conformidad con lo estipulado en la fracción VIII del artículo 128 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Asimismo, del análisis de cada una de las constancias adjuntadas a las solicitudes, se desprende que los

ciudadanos cuyos registros se solicitan cuentan con al menos dos años de residir en el municipio en donde deban desempeñar el cargo. De esa guisa, con las constancias adjuntadas a las solicitudes se cumple cabalmente el requisito señalado en el inciso c) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley electoral estatal, pues con las mismas se acredita el tiempo de residencia de cada uno de los candidatos postulados, además de que se demuestra que los candidatos cumplen con los requisitos de elegibilidad contenidos en las fracciones I y III del artículo 110 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; habida cuenta que de acuerdo a lo establecido en los artículos 20 y 21 de la Constitución Política del Estado, la calidad de guanajuatense se adquiere por nacimiento o por vecindad, precisándose que son guanajuatenses por vecindad los mexicanos que residan en su territorio durante un periodo no menor de dos años.

Por lo que hace a las copias de las credenciales para votar con fotografía, el partido político postulante exhibe copia de las mismas, de las cuales se advierte que fueron expedidas por el ahora Instituto Nacional Electoral y corresponden a cada uno de los ciudadanos postulados como candidatos. En lo concerniente a las constancias de inscripción en el padrón electoral, se desprende que las mismas fueron expedidas por los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral con facultades para ello, y que corresponden a cada uno de los ciudadanos postulados como candidatos, pues los datos contenidos en las mismas coinciden con los que se desprenden de las copias de las respectivas credenciales para votar con fotografía. En tal virtud, a juicio de esta autoridad electoral, tales documentos son útiles para acreditar el cumplimiento del requisito establecido en el inciso d) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley comicial local, además de que con los mismos se demuestra el cumplimiento del requisito de elegibilidad precisado en la fracción I, del artículo 11 de la ley electoral estatal.

En lo tocante a los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 111 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, y en la fracción II del artículo 11 de la ley comicial local, es menester precisar que por tratarse de requisitos de carácter negativo, debe presumirse que se satisfacen, al no resultar apegado a la lógica jurídica que se deban probar los hechos negativos.

Lo anterior tiene sustento en la Tesis LXXVI/2001 aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del siguiente texto y rubro:

ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN.

En las Constituciones Federal y locales, así como en las legislaciones electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido negativo; ejemplo de los primeros son: 1. ser ciudadano mexicano por nacimiento; 2. tener una edad determinada; 3. ser originario del Estado o Municipio en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe del mismo noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policía; d) no ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados por los propios candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la exhibición de los documentos atinentes; en cambio, por lo que se refiere a los requisitos de carácter negativo, en principio, debe presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos negativos. Consecuentemente, corresponderá a quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia.

De igual manera, se observa lo dispuesto en el artículo 12 de la ley comicial local pues en la planilla que se analiza a ninguna persona se le intenta registrar como candidato a distintos cargos de elección popular para el presente proceso electoral, ni se pide el registro de algún candidato registrado o en vías de ser registrado por otro partido político o coalición.

También se advierte que la planilla y listas cuyo registro se pide, se encuentran completas, pues de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, el ayuntamiento de Irapuato se integra, además del Presidente Municipal, con dos síndicos y doce regidores, propietarios y suplentes, lo que coincide con el registro solicitado. En tal virtud, se colma el requisito establecido en la fracción III del artículo 189 de la ley comicial local, que estipula que las candidaturas para integrar ayuntamientos serán registradas por

planillas completas que estarán formadas por los candidatos a presidente y síndico o síndicos y regidores, propietarios y suplentes, que correspondan.

Así, del análisis de la documentación presentada, se desprende que los candidatos postulados satisfacen los requisitos de elegibilidad señalados tanto en los artículos 110 y 111 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, como en los artículos 11 y 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y se colman los requerimientos establecidos en los artículos 189, fracción III y 190 de la propia ley.

Ahora bien, el párrafo final del artículo 190 de la ley electoral local establece que en caso de que el candidato sea postulado en coalición, se deberá cumplir además con lo establecido en la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la ley comicial local, por lo que al tratarse en el presente caso de la solicitud de registro de candidatos postulados por una coalición, debe verificarse el cumplimiento de tales requisitos, lo que se hará en su conjunto al final del presente considerando.

7. León.

La coalición flexible “JUNTOS PARA SERVIR”, presentó solicitud de registro de candidatos para contender en el municipio de León, en la que se contiene los datos de la fórmula de mayoría conformada por los candidatos a presidente municipal, y síndicos propietario y suplente. Asimismo, presentó las listas de candidatos a regidores por el principio de representación proporcional de cada uno de los partidos coaligados.

Del análisis de la solicitud presentada por la coalición flexible “JUNTOS PARA SERVIR” para contender en el municipio de León, se desprende que en la misma obran los datos de los ciudadanos cuyo registros se solicitan como candidatos a presidente municipal, síndicos y regidores, propietarios y suplentes, consistentes en: apellidos paterno, materno y nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, domicilio y tiempo de residencia en el mismo, ocupación, clave de su credencial para votar con fotografía, y el cargo para el que se les postula.

Asimismo, en la solicitud se hace la manifestación de que los candidatos fueron electos de conformidad con las normas estatutarias de los institutos políticos Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza en términos del convenio de coalición, con lo que se colma el requisito establecido en el inciso e) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley electoral del Estado. Asimismo, se cumple lo ordenado en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución del Estado y en el párrafo segundo del artículo 185 de la referida ley electoral, pues las listas de candidatos a regidores se integra por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y se alternan las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar las listas.

A la solicitud se acompañaron los siguientes documentos, correspondientes a cada uno de los ciudadanos integrantes de la planilla y de las listas de los partidos coaligados:

1. Declaración de aceptación de la candidatura;
2. Copia certificada del acta de nacimiento;
3. Constancia de tiempo de residencia;
4. Copia de la credencial para votar con fotografía, y
5. Constancia de inscripción en el padrón electoral.

De las declaraciones de aceptación de las candidaturas se desprende que en cada caso los ciudadanos aceptan las candidaturas para las cuales son postulados, encontrándose todas ellas firmadas de manera autógrafa, por lo que resultan útiles para cumplir el requisito establecido en el inciso a) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley comicial local.

En cuanto a las copias certificadas de las actas de nacimiento, se advierte que las mismas fueron expedidas por los fedatarios públicos facultados para ello y corresponden a cada uno de los ciudadanos postulados como candidatos, por lo que se cumple el requisito fijado en el inciso b) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley electoral de la entidad. Además, de las fechas de nacimiento plasmadas en cada una de las actas, se obtiene que los ciudadanos postulados cumplen con el requisito de edad necesario para ser candidatos, esto es, tener por lo menos veintiún años cumplidos al día de la elección, con lo que se colma el requisito de elegibilidad establecido en la fracción II del artículo 110 de la Constitución Política local.

En lo tocante a las constancias de tiempo de residencia, se advierte que las mismas fueron expedidas, en cada caso, por el servidor público que resulta ser la autoridad municipal competente para expedir tales documentos, esto de conformidad con lo estipulado en la fracción VIII del artículo 128 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Asimismo, del análisis de cada una de las constancias adjuntadas a las solicitudes, se desprende que los ciudadanos cuyos registros se solicitan cuentan con al menos dos años de residir en el municipio en donde deban desempeñar el cargo. De esa guisa, con las constancias adjuntadas a las solicitudes se cumple cabalmente el requisito señalado en el inciso c) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley electoral estatal, pues con las mismas se acredita el tiempo de residencia de cada uno de los candidatos postulados, además de que se demuestra que los candidatos cumplen con los requisitos de elegibilidad contenidos en las fracciones I y III del artículo 110 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; habida cuenta que de acuerdo a lo establecido en los artículos 20 y 21 de la Constitución Política del Estado, la calidad de guanajuatense se adquiere por nacimiento o por vecindad, precisándose que son guanajuatenses por vecindad los mexicanos que residan en su territorio durante un periodo no menor de dos años.

Por lo que hace a las copias de las credenciales para votar con fotografía, el partido político postulante exhibe copia de las mismas, de las cuales se advierte que fueron expedidas por el ahora Instituto Nacional Electoral y corresponden a cada uno de los ciudadanos postulados como candidatos. En lo concerniente a las constancias de inscripción en el padrón electoral, se desprende que las mismas fueron expedidas por los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral con facultades para ello, y que corresponden a cada uno de los ciudadanos postulados como candidatos, pues los datos contenidos en las mismas coinciden con los que se desprenden de las copias de las respectivas credenciales para votar con fotografía. En tal virtud, a juicio de esta autoridad electoral, tales documentos son útiles para acreditar el cumplimiento del requisito establecido en el inciso d) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley comicial local, además de que con los mismos se demuestra el cumplimiento del requisito de elegibilidad precisado en la fracción I, del artículo 11 de la ley electoral estatal.

En lo tocante a los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 111 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, y en la fracción II del artículo 11 de la ley comicial local, es menester precisar que por tratarse de requisitos de carácter negativo, debe presumirse que se satisfacen, al no resultar apegado a la lógica jurídica que se deban probar los hechos negativos.

Lo anterior tiene sustento en la Tesis LXXVI/2001 aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del siguiente texto y rubro:

ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN. En las Constituciones Federal y locales, así como en las legislaciones electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido negativo; ejemplo de los primeros son: 1. ser ciudadano mexicano por nacimiento; 2. tener una edad determinada; 3. ser originario del Estado o Municipio en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe del mismo noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policía; d) no ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados por los propios candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la exhibición de los documentos atinentes; en cambio, por lo que se refiere a los requisitos de carácter negativo, en principio, debe presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos negativos. Consecuentemente, corresponderá a quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia.

De igual manera, se observa lo dispuesto en el artículo 12 de la ley comicial local pues en la planilla que se analiza a ninguna persona se le intenta registrar como candidato a distintos cargos de elección popular para el presente proceso electoral, ni se pide el registro de algún candidato registrado o en vías de ser registrado por otro partido político o coalición.

También se advierte que la planilla y listas cuyo registro se pide, se encuentran completas, pues de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado

de Guanajuato, el ayuntamiento de León se integra, además del Presidente Municipal, con dos síndicos y doce regidores, propietarios y suplentes, lo que coincide con el registro solicitado. En tal virtud, se colma el requisito establecido en la fracción III del artículo 189 de la ley comicial local, que estipula que las candidaturas 29 para integrar ayuntamientos serán registradas por planillas completas que estarán formadas por los candidatos a presidente y síndico o síndicos y regidores, propietarios y suplentes, que correspondan.

Así, del análisis de la documentación presentada, se desprende que los candidatos postulados satisfacen los requisitos de elegibilidad señalados tanto en los artículos 110 y 111 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, como en los artículos 11 y 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y se colman los requerimientos establecidos en los artículos 189, fracción III y 190 de la propia ley.

Ahora bien, el párrafo final del artículo 190 de la ley electoral local establece que en caso de que el candidato sea postulado en coalición, se deberá cumplir además con lo establecido en la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la ley comicial local, por lo que al tratarse en el presente caso de la solicitud de registro de candidatos postulados por una coalición, debe verificarse el cumplimiento de tales requisitos, lo que se hará en su conjunto al final del presente considerando.

8. Manuel Doblado.

La coalición flexible "JUNTOS PARA SERVIR", presentó solicitud de registro de candidatos para contender en el municipio de Manuel Doblado, en la que se contiene los datos de la fórmula de mayoría conformada por los candidatos a presidente municipal, y síndicos propietario y suplente. Asimismo, presentó las listas de candidatos a regidores por el principio de representación proporcional de cada uno de los partidos coaligados. Del análisis de la solicitud presentada por la coalición flexible "JUNTOS PARA SERVIR" para contender en el municipio de Manuel Doblado, se desprende que en la misma obran los datos de los ciudadanos cuyo registros se solicitan como candidatos a presidente municipal, síndicos y regidores, propietarios y suplentes, consistentes en: apellidos paterno, materno y nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, domicilio y tiempo de residencia en el mismo, ocupación, clave de su credencial para votar con fotografía, y el cargo para el que se les postula. Asimismo, en la solicitud se hace la manifestación de que los candidatos fueron electos de conformidad con las normas estatutarias de los institutos políticos Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza en términos del convenio de coalición, con lo que se colma el requisito establecido en el inciso e) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley electoral del Estado. Asimismo, se cumple lo ordenado en el

párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución del Estado y en el párrafo segundo del artículo 185 de la referida ley electoral, pues las listas de candidatos a regidores se integra por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y se alternan las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar las listas.

A la solicitud se acompañaron los siguientes documentos, correspondientes a cada uno de los ciudadanos integrantes de la planilla y de las listas de los partidos coaligados:

1. Declaración de aceptación de la candidatura;
2. Copia certificada del acta de nacimiento;
3. Constancia de tiempo de residencia;
4. Copia de la credencial para votar con fotografía, y
5. Constancia de inscripción en el padrón electoral.

De las declaraciones de aceptación de las candidaturas se desprende que en cada caso los ciudadanos aceptan las candidaturas para las cuales son postulados, encontrándose todas ellas firmadas de manera autógrafa, por lo que resultan útiles para cumplir el requisito establecido en el inciso a) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley comicial local.

En cuanto a las copias certificadas de las actas de nacimiento, se advierte que las mismas fueron expedidas por los fedatarios públicos facultados para ello y corresponden a cada uno de los ciudadanos postulados como candidatos, por lo que se cumple el requisito fijado en el inciso b) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley electoral de la entidad. Además, de las fechas

de nacimiento plasmadas en cada una de las actas, se obtiene que los ciudadanos postulados cumplen con el requisito de edad necesario para ser candidatos, esto es, tener por lo menos veintiún años cumplidos al día de la elección, con lo que se colma el requisito de elegibilidad establecido en la fracción II del artículo 110 de la Constitución Política local.

En lo tocante a las constancias de tiempo de residencia, se advierte que las mismas fueron expedidas, en cada caso, por el servidor público que resulta ser la autoridad municipal competente para expedir tales documentos, esto de conformidad con lo estipulado en la fracción VIII del artículo 128 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Asimismo, del análisis de cada una de las constancias adjuntadas a las solicitudes, se desprende que los ciudadanos cuyos registros se solicitan cuentan con al menos dos años de 31 residir en el municipio en donde deban desempeñar el cargo. De esa guisa, con las constancias adjuntadas a las solicitudes se cumple cabalmente el requisito señalado en el inciso c) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley electoral estatal, pues con las mismas se acredita el tiempo de residencia de cada uno de los candidatos postulados, además de que se demuestra que los candidatos cumplen con los requisitos de elegibilidad contenidos en las fracciones I y III del artículo 110 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; habida cuenta que de acuerdo a lo establecido en los artículos 20 y 21 de la Constitución Política del Estado, la calidad de guanajuatense se adquiere por nacimiento o por vecindad, precisándose que son guanajuatenses por vecindad los mexicanos que residan en su territorio durante un periodo no menor de dos años.

Por lo que hace a las copias de las credenciales para votar con fotografía, el partido político postulante exhibe copia de las mismas, de las cuales se advierte que fueron expedidas por el ahora Instituto Nacional Electoral y corresponden a cada uno de los ciudadanos postulados como candidatos. En lo concerniente a las constancias de inscripción en el padrón electoral, se desprende que las mismas fueron expedidas por los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral con facultades para ello, y que corresponden a cada uno de los ciudadanos postulados como candidatos, pues los datos contenidos en las mismas coinciden con los que se desprenden de las copias de las respectivas credenciales para votar con fotografía. En tal virtud, a juicio de esta autoridad electoral, tales documentos son útiles para acreditar el cumplimiento del requisito establecido en el inciso d) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley comicial local, además de que con los mismos se demuestra el cumplimiento del requisito de elegibilidad precisado en la fracción I, del artículo 11 de la ley electoral estatal.

En lo tocante a los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 111 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, y en la fracción II del artículo 11 de la ley comicial local, es menester precisar que por tratarse de requisitos de carácter negativo, debe presumirse que se satisfacen, al no resultar apegado a la lógica jurídica que se deban probar los hechos negativos.

Lo anterior tiene sustento en la Tesis LXXVI/2001 aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del siguiente texto y rubro:

ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN. En las Constituciones Federal y locales, así como en las legislaciones electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido negativo; ejemplo de los primeros son: 1. ser ciudadano mexicano por nacimiento; 2. tener una edad determinada; 3. ser originario del Estado o Municipio en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe del mismo noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policía; d) no ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados por los propios candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la exhibición de los documentos atinentes; en cambio, por lo que se refiere a los requisitos de carácter negativo, en principio, debe presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos negativos. Consecuentemente, corresponderá a quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia.

De igual manera, se observa lo dispuesto en el artículo 12 de la ley comicial local pues en la planilla que se analiza a ninguna persona se le intenta registrar como candidato a distintos

cargos de elección popular para el presente proceso electoral, ni se pide el registro de algún candidato registrado o en vías de ser registrado por otro partido político o coalición.

También se advierte que la planilla y listas cuyo registro se pide, se encuentran completas, pues de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, el ayuntamiento de Manuel Doblado se integra, además del Presidente Municipal, con un síndico y ocho regidores, propietarios y suplentes, lo que coincide con el registro solicitado. En tal virtud, se colma el requisito establecido en la fracción III del artículo 189 de la ley comicial local, que estipula que las candidaturas para integrar ayuntamientos serán registradas por planillas completas que estarán formadas por los candidatos a presidente y síndico o síndicos y regidores, propietarios y suplentes, que correspondan.

Así, del análisis de la documentación presentada, se desprende que los candidatos postulados satisfacen los requisitos de elegibilidad señalados tanto en los artículos 110 y 111 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, como en los artículos 11 y 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y se colman los requerimientos establecidos en los artículos 189, fracción III y 190 de la propia ley.

Ahora bien, el párrafo final del artículo 190 de la ley electoral local establece que en caso de que el candidato sea postulado en coalición, se deberá cumplir además con lo establecido en la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la ley comicial local, por lo que al tratarse en el presente caso de la solicitud de registro de candidatos postulados por una coalición, debe verificarse el cumplimiento de tales requisitos, lo que se hará en su conjunto al final del presente considerando.

9. Pénjamo.

La coalición flexible "JUNTOS PARA SERVIR", presentó solicitud de registro de candidatos para contender en el municipio de Pénjamo, en la que se contiene los datos de la fórmula de mayoría conformada por los candidatos a presidente municipal, y síndicos propietario y suplente. Asimismo, presentó las listas de candidatos a regidores por el principio de representación proporcional de cada uno de los partidos coaligados.

Del análisis de la solicitud presentada por la coalición flexible "JUNTOS PARA SERVIR" para contender en el municipio de Pénjamo, se desprende que en la misma obran los datos de los ciudadanos cuyo registros se solicitan como candidatos a presidente municipal, síndicos y regidores, propietarios y suplentes, consistentes en: apellidos paterno, materno y nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, domicilio y tiempo de residencia en el mismo, ocupación, clave de su credencial para votar con fotografía, y el cargo para el que se les postula.

Asimismo, en la solicitud se hace la manifestación de que los candidatos fueron electos de conformidad con las normas estatutarias de los institutos políticos Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza en términos del convenio de coalición, con lo que se colma el requisito establecido en el inciso e) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley electoral del Estado. Asimismo, se cumple lo ordenado en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución del Estado y en el párrafo segundo del artículo 185 de la referida ley electoral, pues las listas de candidatos a regidores se integra por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y se alternan las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar las listas.

A la solicitud se acompañaron los siguientes documentos, correspondientes a cada uno de los ciudadanos integrantes de la planilla y de las listas de los partidos coaligados:

1. Declaración de aceptación de la candidatura;
2. Copia certificada del acta de nacimiento;
3. Constancia de tiempo de residencia;
4. Copia de la credencial para votar con fotografía, y
5. Constancia de inscripción en el padrón electoral.

De las declaraciones de aceptación de las candidaturas se desprende que en cada caso los ciudadanos aceptan las candidaturas para las cuales son postulados, encontrándose todas ellas firmadas de manera autógrafa, por lo que resultan útiles para cumplir el requisito establecido en el inciso a) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley comicial local.

En cuanto a las copias certificadas de las actas de nacimiento, se advierte que las mismas fueron expedidas por los fedatarios públicos facultados para ello y corresponden a cada uno de los ciudadanos postulados como candidatos, por lo que se cumple el requisito fijado en el inciso b) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley electoral de la entidad. Además, de las fechas de nacimiento plasmadas en cada una de las actas, se obtiene que los ciudadanos postulados cumplen con el requisito de edad necesario para ser candidatos, esto es, tener por lo menos veintiún años cumplidos al día de la elección, con lo que se colma el requisito de elegibilidad establecido en la fracción II del artículo 110 de la Constitución Política local.

En lo tocante a las constancias de tiempo de residencia, se advierte que las mismas fueron expedidas, en cada caso, por el servidor público que resulta ser la autoridad municipal competente para expedir tales documentos, esto de conformidad con lo estipulado en la fracción VIII del artículo 128 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Asimismo, del análisis de cada una de las constancias adjuntadas a las solicitudes, se desprende que los ciudadanos cuyos registros se solicitan cuentan con al menos dos años de residir en el municipio en donde deban desempeñar el cargo. De esa guisa, con las constancias adjuntadas a las solicitudes se cumple cabalmente el requisito señalado en el inciso c) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley electoral estatal, pues con las mismas se acredita el tiempo de residencia de cada uno de los candidatos postulados, además de que se demuestra que los candidatos cumplen con los requisitos de elegibilidad contenidos en las fracciones I y III del artículo 110 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; habida cuenta que de acuerdo a lo establecido en los artículos 20 y 21 de la Constitución Política del Estado, la calidad de guanajuatense se adquiere por nacimiento o por vecindad, precisándose que son guanajuatenses por vecindad los mexicanos que residan en su territorio durante un periodo no menor de dos años. Por lo que hace a las copias de las credenciales para votar con fotografía, el partido político postulante exhibe copia de las mismas, de las cuales se advierte que fueron expedidas por el ahora Instituto Nacional Electoral y corresponden a cada uno de los ciudadanos postulados como candidatos. En lo concerniente a las constancias de inscripción en el padrón 35 electoral, se desprende que las mismas fueron expedidas por los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral con facultades para ello, y que corresponden a cada uno de los ciudadanos postulados como candidatos, pues los datos contenidos en las mismas coinciden con los que se desprenden de las copias de las respectivas credenciales para votar con fotografía. En tal virtud, a juicio de esta autoridad electoral, tales documentos son útiles para acreditar el cumplimiento del requisito establecido en el inciso d) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley comicial local, además de que con los mismos se demuestra el cumplimiento del requisito de elegibilidad precisado en la fracción I, del artículo 11 de la ley electoral estatal.

Por lo que hace a las copias de las credenciales para votar con fotografía adjuntadas, la coalición exhibe copias de las mismas. Además, de las copias presentadas se advierte que las credenciales para votar con fotografía de las cuales se obtuvieron, fueron expedidas por el ahora Instituto Nacional Electoral y corresponden a cada uno de los ciudadanos postulados como candidatos. En lo concerniente a las constancias de inscripción en el padrón electoral, se desprende que las mismas fueron expedidas por los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral con facultades para ello, y que corresponden a cada uno de los ciudadanos postulados como candidatos, pues los datos contenidos en las mismas coinciden con los que se desprenden de las copias de las respectivas credenciales para votar con fotografía. En tal virtud, a juicio de esta autoridad electoral, tales documentos son útiles para acreditar el cumplimiento del requisito establecido en el inciso d) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley comicial local, además de que con los mismos se demuestra el cumplimiento del requisito de elegibilidad precisado en la fracción I, del artículo 11 de la ley electoral estatal.

En lo tocante a los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 111 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, y en la fracción II del artículo 11 de la ley comicial local, es menester precisar que por tratarse de requisitos de carácter negativo, debe presumirse que se satisfacen, al no resultar apegado a la lógica jurídica que se deban probar los hechos negativos.

Lo anterior tiene sustento en la Tesis LXXVI/2001 aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del siguiente texto y rubro:

ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN. En las Constituciones Federal y locales, así como en las legislaciones electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido

negativo; ejemplo de los primeros son: 1. ser ciudadano mexicano por nacimiento; 2. tener una edad determinada; 3. ser originario del Estado o Municipio en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe del mismo noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policía; d) no ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados por los propios candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la exhibición de los documentos atinentes; en cambio, por lo que se refiere a los requisitos de carácter negativo, en principio, debe presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos negativos. Consecuentemente, corresponderá a quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia.

De igual manera, se observa lo dispuesto en el artículo 12 de la ley comicial local pues en la planilla que se analiza a ninguna persona se le intenta registrar como candidato a distintos cargos de elección popular para el presente proceso electoral, ni se pide el registro de algún candidato registrado o en vías de ser registrado por otro partido político o coalición. También se advierte que la planilla y listas cuyo registro se pide, se encuentran completas, pues de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, el ayuntamiento de Pénjamo se integra, además del Presidente Municipal, con un síndico y diez regidores, propietarios y suplentes, lo que coincide con el registro solicitado. En tal virtud, se colma el requisito establecido en la fracción III del artículo 189 de la ley comicial local, que estipula que las candidaturas para integrar ayuntamientos serán registradas por planillas completas que estarán formadas por los candidatos a presidente y síndico o síndicos y regidores, propietarios y suplentes, que correspondan.

Así, del análisis de la documentación presentada, se desprende que los candidatos postulados satisfacen los requisitos de elegibilidad señalados tanto en los artículos 110 y 111 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, como en los artículos 11 y 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y se colman los requerimientos establecidos en los artículos 189, fracción III y 190 de la propia ley.

Ahora bien, el párrafo final del artículo 190 de la ley electoral local establece que en caso de que el candidato sea postulado en coalición, se deberá cumplir además con lo establecido en la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la ley comicial local, por lo que al tratarse en el presente caso de la solicitud de registro de candidatos postulados por una coalición, debe verificarse el cumplimiento de tales requisitos, lo que se hará en su conjunto al final del presente considerando.

10. San Luis de la Paz.

La coalición flexible "JUNTOS PARA SERVIR", presentó solicitud de registro de candidatos para contender en el municipio de San Luis de la Paz, en la que se contiene los datos de la fórmula de mayoría conformada por los candidatos a presidente municipal, y síndicos propietario y suplente. Asimismo, presentó las listas de candidatos a regidores por el principio de representación proporcional de cada uno de los partidos coaligados.

Del análisis de la solicitud presentada por la coalición flexible "JUNTOS PARA SERVIR" para contender en el municipio de San Luis de la Paz, se desprende que en la misma obran los datos de los ciudadanos cuyo registros se solicitan como candidatos a presidente municipal, síndicos y regidores, propietarios y suplentes, consistentes en: apellidos paterno, materno y nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, domicilio y tiempo de residencia en el mismo, ocupación, clave de su credencial para votar con fotografía, y el cargo para el que se les postula. Asimismo, en la solicitud se hace la manifestación de que los candidatos fueron electos de conformidad con las normas estatutarias de los institutos políticos Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza en términos del convenio de coalición, con lo que se colma el requisito establecido en el inciso e) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley electoral del Estado.

Asimismo, se cumple lo ordenado en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución del Estado y en el párrafo segundo del artículo 185 de la referida ley electoral, pues las listas de candidatos a regidores se integra por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y se alternan las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar las listas.

A la solicitud se acompañaron los siguientes documentos, correspondientes a cada uno de los ciudadanos integrantes de la planilla y de las listas de los partidos coaligados:

1. Declaración de aceptación de la candidatura;
2. Copia certificada del acta de nacimiento;
3. Constancia de tiempo de residencia;
4. Copia de la credencial para votar con fotografía, y
5. Constancia de inscripción en el padrón electoral.

De las declaraciones de aceptación de las candidaturas se desprende que en cada caso los ciudadanos aceptan las candidaturas para las cuales son postulados, encontrándose todas ellas firmadas de manera autógrafa, por lo que resultan útiles para cumplir el requisito establecido en el inciso a) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley comicial local.

En cuanto a las copias certificadas de las actas de nacimiento, se advierte que las mismas fueron expedidas por los fedatarios públicos facultados para ello y corresponden a cada uno de los ciudadanos postulados como candidatos, por lo que se cumple el requisito fijado en el inciso b) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley electoral de la entidad. Además, de las fechas de nacimiento plasmadas en cada una de las actas, se obtiene que los ciudadanos postulados cumplen con el requisito de edad necesario para ser candidatos, esto es, tener por lo menos veintiún años cumplidos al día de la elección, con lo que se colma el requisito de elegibilidad establecido en la fracción II del artículo 110 de la Constitución Política local.

En lo tocante a las constancias de tiempo de residencia, se advierte que las mismas fueron expedidas, en cada caso, por el servidor público que resulta ser la autoridad municipal competente para expedir tales documentos, esto de conformidad con lo estipulado en la fracción VIII del artículo 128 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Asimismo, del análisis de cada una de las constancias adjuntadas a las solicitudes, se desprende que los ciudadanos cuyos registros se solicitan cuentan con al menos dos años de residir en el municipio en donde deban desempeñar el cargo. De esa guisa, con las constancias adjuntadas a las solicitudes se cumple cabalmente el requisito señalado en el inciso c) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley electoral estatal, pues con las mismas se acredita el tiempo de residencia de cada uno de los candidatos postulados, además de que se demuestra que los candidatos cumplen con los requisitos de elegibilidad contenidos en las fracciones I y III del artículo 110 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; habida cuenta que de acuerdo a lo establecido en los artículos 20 y 21 de la Constitución Política del Estado, la calidad de guanajuatense se adquiere por nacimiento o por vecindad, precisándose que son guanajuatenses por vecindad los mexicanos que residan en su territorio durante un periodo no menor de dos años.

Por lo que hace a las copias de las credenciales para votar con fotografía, el partido político postulante exhibe copia de las mismas, de las cuales se advierte que fueron expedidas por el ahora Instituto Nacional Electoral y corresponden a cada uno de los ciudadanos postulados como candidatos. En lo concerniente a las constancias de inscripción en el padrón electoral, se desprende que las mismas fueron expedidas por los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral con facultades para ello, y que 39 corresponden a cada uno de los ciudadanos postulados como candidatos, pues los datos contenidos en las mismas coinciden con los que se desprenden de las copias de las respectivas credenciales para votar con fotografía. En tal virtud, a juicio de esta autoridad electoral, tales documentos son útiles para acreditar el cumplimiento del requisito establecido en el inciso d) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley comicial local, además de que con los mismos se demuestra el cumplimiento del requisito de elegibilidad precisado en la fracción I, del artículo 11 de la ley electoral estatal.

En lo tocante a los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 111 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, y en la fracción II del artículo 11 de la ley comicial local, es menester precisar que por tratarse de requisitos de carácter negativo, debe presumirse que se satisfacen, al no resultar apegado a la lógica jurídica que se deban probar los hechos negativos.

Lo anterior tiene sustento en la Tesis LXXVI/2001 aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del siguiente texto y rubro:

ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN. En las Constituciones Federal y locales, así como en las legislaciones electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido negativo; ejemplo de los primeros son: 1. ser ciudadano mexicano por nacimiento; 2. tener una edad determinada; 3. ser originario del Estado o Municipio en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe del mismo noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policía; d) no ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados por los propios candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la exhibición de los documentos atinentes; en cambio, por lo que se refiere a los requisitos de carácter negativo, en principio, debe presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos negativos. Consecuentemente, corresponderá a quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia.

De igual manera, se observa lo dispuesto en el artículo 12 de la ley comicial local pues en la planilla que se analiza a ninguna persona se le intenta registrar como candidato a distintos cargos de elección popular para el presente proceso electoral, ni se pide el registro de algún candidato registrado o en vías de ser registrado por otro partido político o coalición.

También se advierte que la planilla y listas cuyo registro se pide, se encuentran completas, pues de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, el ayuntamiento de San Luis de la Paz se integra, además del Presidente Municipal, con un síndico y diez regidores, propietarios y suplentes, lo que coincide con el registro solicitado. En tal virtud, se colma el requisito establecido en la fracción III del artículo 189 de la ley comicial local, que estipula que las candidaturas para integrar ayuntamientos serán registradas por planillas completas que estarán formadas por los candidatos a presidente y síndico o síndicos y regidores, propietarios y suplentes, que correspondan.

Así, del análisis de la documentación presentada, se desprende que los candidatos postulados satisfacen los requisitos de elegibilidad señalados tanto en los artículos 110 y 111 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, como en los artículos 11 y 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y se colman los requerimientos establecidos en los artículos 189, fracción III y 190 de la propia ley.

Ahora bien, el párrafo final del artículo 190 de la ley electoral local establece que en caso de que el candidato sea postulado en coalición, se deberá cumplir además con lo establecido en la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la ley comicial local, por lo que al tratarse en el presente caso de la solicitud de registro de candidatos postulados por una coalición, debe verificarse el cumplimiento de tales requisitos, lo que se hará en su conjunto al final del presente considerando.

11. San Miguel de Allende.

La coalición flexible "JUNTOS PARA SERVIR", presentó solicitud de registro de candidatos para contender en el municipio de San Miguel de Allende se contiene los datos de la fórmula de mayoría conformada por los candidatos a presidente municipal, y síndicos propietario y suplente. Asimismo, presentó las listas de candidatos a regidores por el principio de representación proporcional de cada uno de los partidos coaligados.

Del análisis de la solicitud presentada por la coalición flexible "JUNTOS PARA SERVIR" para contender en el municipio de San Miguel de Allende, se desprende que en la misma obran los datos de los ciudadanos cuyo registros se solicitan como candidatos a presidente municipal, síndicos y regidores, propietarios y suplentes, consistentes en: apellidos paterno, materno y nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, domicilio y tiempo de residencia en el mismo, ocupación, clave de su credencial para votar con fotografía, y el cargo para el que se les postula.

Asimismo, en la solicitud se hace la manifestación de que los candidatos fueron electos de conformidad con las normas estatutarias de los institutos políticos Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza en términos del convenio de coalición, con lo que se colma el requisito establecido en el inciso e) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley electoral del Estado. Asimismo, se cumple lo ordenado en el párrafo

segundo del artículo 17 de la Constitución del Estado y en el párrafo segundo del artículo 185 de la referida ley electoral, pues las listas de candidatos a regidores se integra por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y se alternan las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar las listas.

A la solicitud se acompañaron los siguientes documentos, correspondientes a cada uno de los ciudadanos integrantes de la planilla y de las listas de los partidos coaligados:

1. Declaración de aceptación de la candidatura;
2. Copia certificada del acta de nacimiento;
3. Constancia de tiempo de residencia;
4. Copia de la credencial para votar con fotografía, y
5. Constancia de inscripción en el padrón electoral.

De las declaraciones de aceptación de las candidaturas se desprende que en cada caso los ciudadanos aceptan las candidaturas para las cuales son postulados, encontrándose todas ellas firmadas de manera autógrafa, por lo que resultan útiles para cumplir el requisito establecido en el inciso a) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley comicial local.

En cuanto a las copias certificadas de las actas de nacimiento, se advierte que las mismas fueron expedidas por los fedatarios públicos facultados para ello y corresponden a cada uno de los ciudadanos postulados como candidatos, por lo que se cumple el requisito fijado en el inciso b) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley electoral de la entidad. Además, de las fechas de nacimiento plasmadas en cada una de las actas, se obtiene que los ciudadanos postulados cumplen con el requisito de edad necesario para ser candidatos, esto es, tener por lo menos veintiún años cumplidos al día de la elección, con lo que se colma el requisito de elegibilidad establecido en la fracción II del artículo 110 de la Constitución Política local.

En lo tocante a las constancias de tiempo de residencia, se advierte que las mismas fueron expedidas, en cada caso, por el servidor público que resulta ser la autoridad municipal competente para expedir tales documentos, esto de conformidad con lo estipulado en la fracción VIII del artículo 128 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Asimismo, del análisis de cada una de las constancias adjuntadas a las solicitudes, se desprende que los ciudadanos cuyos registros se solicitan cuentan con al menos dos años de residir en el municipio en donde deban desempeñar el cargo. De esa guisa, con las constancias adjuntadas a las solicitudes se cumple cabalmente el requisito señalado en el inciso c) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley electoral estatal, pues con las mismas se acredita el tiempo de residencia de cada uno de los candidatos postulados, además de que se demuestra que los candidatos cumplen con los requisitos de elegibilidad contenidos en las fracciones I y III del artículo 110 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; habida cuenta que de acuerdo a lo establecido en los artículos 20 y 21 de la Constitución Política del Estado, la calidad de guanajuatense se adquiere por nacimiento o por vecindad, precisándose que son guanajuatenses por vecindad los mexicanos que residan en su territorio durante un periodo no menor de dos años.

Por lo que hace a las copias de las credenciales para votar con fotografía, el partido político postulante exhibe copia de las mismas, de las cuales se advierte que fueron expedidas por el ahora Instituto Nacional Electoral y corresponden a cada uno de los ciudadanos postulados como candidatos. En lo concerniente a las constancias de inscripción en el padrón electoral, se desprende que las mismas fueron expedidas por los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral con facultades para ello, y que corresponden a cada uno de los ciudadanos postulados como candidatos, pues los datos contenidos en las mismas coinciden con los que se desprenden de las copias de las respectivas credenciales para votar con fotografía. En tal virtud, a juicio de esta autoridad electoral, tales documentos son útiles para acreditar el cumplimiento del requisito establecido en el inciso d) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley comicial local, además de que con los mismos se demuestra el cumplimiento del requisito de elegibilidad precisado en la fracción I, del artículo 11 de la ley electoral estatal.

En lo tocante a los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 111 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, y en la fracción II del artículo 11 de la ley comicial local, es menester precisar que por tratarse de requisitos de carácter negativo, debe presumirse que

se satisfacen, al no resultar apegado a la lógica jurídica que se deban probar los hechos negativos.

Lo anterior tiene sustento en la Tesis LXXVI/2001 aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del siguiente texto y rubro:

ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN. En las Constituciones Federal y locales, así como en las legislaciones electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido negativo; ejemplo de los primeros son: 1. ser ciudadano mexicano por nacimiento; 2. tener una edad determinada; 3. ser originario del Estado o Municipio en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe del mismo noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policía; d) no ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados por los propios candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la exhibición de los documentos atinentes; en cambio, por lo que se refiere a los requisitos de carácter negativo, en principio, debe presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos negativos. Consecuentemente, corresponderá a quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia.

De igual manera, se observa lo dispuesto en el artículo 12 de la ley comicial local pues en la planilla que se analiza a ninguna persona se le intenta registrar como candidato a distintos cargos de elección popular para el presente proceso electoral, ni se pide el registro de algún candidato registrado o en vías de ser registrado por otro partido político o coalición.

También se advierte que la planilla y listas cuyo registro se pide, se encuentran completas, pues de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, el ayuntamiento de San Miguel de Allende se integra, además del Presidente Municipal, con un síndico y diez regidores, propietarios y suplentes, lo que coincide con el registro solicitado. En tal virtud, se colma el requisito establecido en la fracción III del artículo 189 de la ley comicial local, que estipula que las candidaturas para integrar ayuntamientos serán registradas por planillas completas que estarán formadas por los candidatos a presidente y síndico o síndicos y regidores, propietarios y suplentes, que correspondan.

Así, del análisis de la documentación presentada, se desprende que los candidatos postulados satisfacen los requisitos de elegibilidad señalados tanto en los artículos 110 y 111 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, como en los artículos 11 y 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y se colman los requerimientos establecidos en los artículos 189, fracción III y 190 de la propia ley.

Ahora bien, el párrafo final del artículo 190 de la ley electoral local establece que en caso de que el candidato sea postulado en coalición, se deberá cumplir además con lo establecido en la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la ley comicial local, por lo que al tratarse en el presente caso de la solicitud de registro de candidatos postulados por una coalición, debe verificarse el cumplimiento de tales requisitos, lo que se hará en su conjunto al final del presente considerando.

12. Tierra Blanca.

La coalición flexible "JUNTOS PARA SERVIR", presentó solicitud de registro de candidatos para contender en el municipio de Tierra Blanca, en la que se contiene los datos de la fórmula de mayoría conformada por los candidatos a presidente municipal, y síndicos propietario y suplente. Asimismo, presentó las listas de candidatos a regidores por el principio de representación proporcional de cada uno de los partidos coaligados.

Del análisis de la solicitud presentada por la coalición flexible "JUNTOS PARA SERVIR" para contender en el municipio de Tierra Blanca, se desprende que en la misma obran los datos de los ciudadanos cuyo registros se solicitan como candidatos a presidente municipal, síndicos y regidores, propietarios y suplentes, consistentes en: apellidos paterno, materno y nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, domicilio y tiempo de residencia en el mismo, ocupación, clave de su credencial para votar con fotografía, y el cargo para el que se les postula. Asimismo,

en la solicitud se hace la manifestación de que los candidatos fueron electos de conformidad con las normas estatutarias de los institutos políticos Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza en términos del convenio de coalición, con lo que se colma el requisito establecido en el inciso e) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley electoral del Estado.

Asimismo, se cumple lo ordenado en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución del Estado y en el párrafo segundo del artículo 185 de la referida ley electoral, pues las listas de candidatos a regidores se integra por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y se alternan las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar las listas.

A la solicitud se acompañaron los siguientes documentos, correspondientes a cada uno de los ciudadanos integrantes de la planilla y de las listas de los partidos coaligados:

1. Declaración de aceptación de la candidatura;
2. Copia certificada del acta de nacimiento;
3. Constancia de tiempo de residencia;
4. Copia de la credencial para votar con fotografía, y
5. Constancia de inscripción en el padrón electoral.

De las declaraciones de aceptación de las candidaturas se desprende que en cada caso los ciudadanos aceptan las candidaturas para las cuales son postulados, encontrándose todas ellas firmadas de manera autógrafa, por lo que resultan útiles para cumplir el requisito establecido en el inciso a) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley comicial local.

En cuanto a las copias certificadas de las actas de nacimiento, se advierte que las mismas fueron expedidas por los fedatarios públicos facultados para ello y corresponden a cada uno de los ciudadanos postulados como candidatos, por lo que se cumple el requisito fijado en el inciso b) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley electoral de la entidad. Además, de las fechas de nacimiento plasmadas en cada una de las actas, se obtiene que los ciudadanos postulados cumplen con el requisito de edad necesario para ser candidatos, esto es, tener por lo menos veintiún años cumplidos al día de la elección, con lo que se colma el requisito de elegibilidad establecido en la fracción II del artículo 110 de la Constitución Política local.

En lo tocante a las constancias de tiempo de residencia, se advierte que las mismas fueron expedidas, en cada caso, por el servidor público que resulta ser la autoridad municipal competente para expedir tales documentos, esto de conformidad con lo estipulado en la fracción VIII del artículo 128 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Asimismo, del análisis de cada una de las constancias adjuntadas a las solicitudes, se desprende que los ciudadanos cuyos registros se solicitan cuentan con al menos dos años de residir en el municipio en donde deban desempeñar el cargo. De esa guisa, con las constancias adjuntadas a las solicitudes se cumple cabalmente el requisito señalado en el inciso c) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley electoral estatal, pues con las mismas se acredita el tiempo de residencia de cada uno de los candidatos postulados, además de que se demuestra que los candidatos cumplen con los requisitos de elegibilidad contenidos en las fracciones I y III del artículo 110 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; habida cuenta que de acuerdo a lo establecido en los artículos 20 y 21 de la Constitución Política del Estado, la calidad de guanajuatense se adquiere por nacimiento o por vecindad, precisándose que son guanajuatenses por vecindad los mexicanos que residan en su territorio durante un periodo no menor de dos años.

Por lo que hace a las copias de las credenciales para votar con fotografía, el partido político postulante exhibe copia de las mismas, de las cuales se advierte que fueron expedidas por el ahora Instituto Nacional Electoral y corresponden a cada uno de los ciudadanos postulados como candidatos. En lo concerniente a las constancias de inscripción en el padrón electoral, se desprende que las mismas fueron expedidas por los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral con facultades para ello, y que corresponden a cada uno de los ciudadanos postulados como candidatos, pues los datos contenidos en las mismas coinciden con los que se desprenden de las copias de las respectivas credenciales para votar con fotografía. En tal virtud, a juicio de esta autoridad electoral, tales documentos son útiles para acreditar el cumplimiento del requisito establecido en el inciso d) del segundo párrafo del artículo 190 de la ley comicial local, además

de que con los mismos se demuestra el cumplimiento del requisito de elegibilidad precisado en la fracción I, del artículo 11 de la ley electoral estatal.

En lo tocante a los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 111 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, y en la fracción II del artículo 11 de la ley comicial local, es menester precisar que por tratarse de requisitos de carácter negativo, debe presumirse que se satisfacen, al no resultar apegado a la lógica jurídica que se deban probar los hechos negativos.

Lo anterior tiene sustento en la Tesis LXXVI/2001 aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del siguiente texto y rubro:

ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN. En las Constituciones Federal y locales, así como en las legislaciones electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido negativo; ejemplo de los primeros son: 1. ser ciudadano mexicano por nacimiento; 2. tener una edad determinada; 3. ser originario del Estado o Municipio en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe del mismo noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policía; d) no ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados por los propios candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la exhibición de los documentos atinentes; en cambio, por lo que se refiere a los requisitos de carácter negativo, en principio, debe presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos negativos. Consecuentemente, corresponderá a quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia.

De igual manera, se observa lo dispuesto en el artículo 12 de la ley comicial local pues en la planilla que se analiza a ninguna persona se le intenta registrar como candidato a distintos cargos de elección popular para el presente proceso electoral, ni se pide el registro de algún candidato registrado o en vías de ser registrado por otro partido político o coalición.

También se advierte que la planilla y listas cuyo registro se pide, se encuentran completas, pues de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, el ayuntamiento de Tierra Blanca se integra, además del Presidente Municipal, con un síndico y ocho regidores, propietarios y suplentes, lo que coincide con el registro solicitado. En tal virtud, se colma el requisito establecido en la fracción III del artículo 189 de la ley comicial local, que estipula que las candidaturas para integrar ayuntamientos serán registradas por planillas completas que estarán formadas por los candidatos a presidente y síndico o síndicos y regidores, propietarios y suplentes, que correspondan.

Así, del análisis de la documentación presentada, se desprende que los candidatos postulados satisfacen los requisitos de elegibilidad señalados tanto en los artículos 110 y 111 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, como en los artículos 11 y 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y se colman los requerimientos establecidos en los artículos 189, fracción III y 190 de la propia ley.

Análisis de los requisitos referidos en el último párrafo del artículo 190 de la ley comicial local.

Ahora bien, una vez analizados los requisitos a que se refieren los artículos 110 y 111 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, y los artículos 11 y 12, 178, fracción III y 189 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, procede revisar si se colma también en todos los casos, el requisito previsto en el último párrafo del artículo 190 de la ley electoral local, el cual dispone que en el caso de que el candidato sea postulado en coalición se deberá cumplir, además, lo establecido en la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la ley electoral local.

Para lo anterior, es necesario atender a las disposiciones concernientes a las coaliciones, contenidas en la Ley General de Partidos Políticos, las cuales son del tenor siguiente:

Artículo 87.

1. Los partidos políticos nacionales podrán formar coaliciones para las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como de senadores y de diputados por el principio de mayoría relativa.
2. Los partidos políticos nacionales y locales podrán formar coaliciones para las elecciones de Gobernador, diputados a las legislaturas locales de mayoría relativa y ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa de mayoría relativa y los titulares de los órganos políticoadministrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
- 3. Los partidos políticos no podrán postular candidatos propios donde ya hubiere candidatos de la coalición de la que ellos formen parte.**
- 4. Ningún partido político podrá registrar como candidato propio a quien ya haya sido registrado como candidato por alguna coalición.**
- 5. Ninguna coalición podrá postular como candidato de la coalición a quien ya haya sido registrado como candidato por algún partido político.**
6. Ningún partido político podrá registrar a un candidato de otro partido político. No se aplicará esta prohibición en los casos en que exista coalición en los términos del presente Capítulo o, en su caso, en el supuesto previsto en el párrafo 5 del artículo 85 de esta Ley.
7. Los partidos políticos que se coaliguen para participar en las elecciones, deberán celebrar y registrar el convenio correspondiente en los términos del presente Capítulo.
8. El convenio de coalición podrá celebrarse por dos o más partidos políticos.
9. Los partidos políticos no podrán celebrar más de una coalición en un mismo proceso electoral federal o local. 10. Los partidos políticos no podrán distribuir o transferirse votos mediante convenio de coalición.
11. Concluida la etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones de senadores y diputados, terminará automáticamente la coalición por la que se hayan postulado candidatos, en cuyo caso los candidatos a senadores o diputados de la coalición que resultaren electos quedarán comprendidos en el partido político o grupo parlamentario que se haya señalado en el convenio de coalición.
12. Independientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el mismo adopten los partidos coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate; los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos para todos los efectos establecidos en esta Ley.
13. Los votos en los que se hubiesen marcado más de una opción de los partidos coaligados, serán considerados válidos para el candidato postulado, contarán como un solo voto.
14. En todo caso, cada uno de los partidos coaligados deberá registrar listas propias de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional y su propia lista de candidatos a senadores por el mismo principio.
15. Las coaliciones deberán ser uniformes. Ningún partido político podrá participar en más de una coalición y éstas no podrán ser diferentes, en lo que hace a los partidos que las integran, por tipo de elección.

Artículo 88.

1. Los partidos políticos podrán formar coaliciones totales, parciales y flexibles.
2. Se entiende como coalición total, aquella en la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso federal o local, a la totalidad de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral.
3. Si dos o más partidos se coaligan en forma total para las elecciones de senadores o diputados, deberán coaligarse para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso de las elecciones locales si dos o más partidos se coaligan en forma total para las elecciones de diputados locales o de diputados a la Asamblea Legislativa, deberán coaligarse para la elección de Gobernador o Jefe de Gobierno.
4. Si una vez registrada la coalición total, la misma no registrara a los candidatos a los cargos de elección, en los términos del párrafo anterior, y dentro de los plazos señalados para tal efecto en

la presente Ley, la coalición y el registro del candidato para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Gobernador o Jefe de Gobierno quedarán automáticamente sin efectos.

5. Coalición parcial es aquella en la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso federal o local, al menos al cincuenta por ciento de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral.

6. Se entiende como coalición flexible, aquella en la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso electoral federal o local, al menos a un veinticinco por ciento de candidatos a puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral.

Artículo 89.

1. En todo caso, para el registro de la coalición los partidos políticos que pretendan coaligarse deberán:

a) Acreditar que la coalición fue aprobada por el órgano de dirección nacional que establezcan los estatutos de cada uno de los partidos políticos coaligados y que dichos órganos expresamente aprobaron la plataforma electoral, y en su caso, el programa de gobierno de la coalición o de uno de los partidos coaligados;

b) Comprobar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos políticos coaligados aprobaron, en su caso, la postulación y el registro de determinado candidato para la elección presidencial;

c) Acreditar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos políticos coaligados aprobaron, en su caso, postular y registrar, como coalición, a los candidatos a los cargos de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa, y

d) En su oportunidad, cada partido integrante de la coalición de que se trate deberá registrar, por sí mismo, las listas de candidatos a diputados y senadores por el principio de representación proporcional.

Artículo 90.

1. En el caso de coalición, independientemente de la elección para la que se realice, cada partido conservará su propia representación en los consejos del Instituto y ante las mesas directivas de casilla.

Artículo 91.

1. El convenio de coalición contendrá en todos los casos:

a) Los partidos políticos que la forman;

b) El proceso electoral federal o local que le da origen;

c) El procedimiento que seguirá cada partido para la selección de los candidatos que serán postulados por la coalición;

d) Se deberá acompañar la plataforma electoral y, en su caso, el programa de gobierno que sostendrá su candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como los documentos en que conste la aprobación por los órganos partidistas correspondientes;

e) El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece originalmente cada uno de los candidatos registrados por la coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el que quedarían comprendidos en el caso de resultar electos, y

f) Para el caso de la interposición de los medios de impugnación previstos en la ley de la materia, quien ostentaría la representación de la coalición.

2. En el convenio de coalición se deberá manifestar que los partidos políticos coaligados, según el tipo de coalición de que se trate, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se hayan fijado para las distintas elecciones, como si se tratara de un solo partido. De la misma manera, deberá señalarse el monto de las aportaciones de cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, así como la forma de reportarlo en los informes correspondientes.

3. A las coaliciones totales, parciales y flexibles les será otorgada la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

4. En todo caso, los mensajes en radio y televisión que correspondan a candidatos de coalición deberán identificar esa calidad y el partido responsable del mensaje.

5. Es aplicable a las coaliciones electorales, cualquiera que sea su ámbito territorial y tipo de elección, en todo tiempo y circunstancia, lo establecido en el segundo párrafo del Apartado A de la Base III del artículo 41 de la Constitución.

Artículo 92.

1. La solicitud de registro del convenio de coalición, según sea el caso, deberá presentarse al presidente del Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local, según la elección que lo motive, acompañado de la documentación pertinente, a más tardar treinta días antes de que se inicie el periodo de precampaña de la elección de que se trate. Durante las ausencias del presidente del Consejo General el convenio se podrá presentar ante el secretario ejecutivo del Instituto o del Organismo Público Local, según la elección que lo motive.

2. El presidente del Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local, integrará el expediente e informará al Consejo General.

3. El Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local, resolverá a más tardar dentro de los diez días siguientes a la presentación del convenio.

4. Una vez registrado un convenio de coalición, el Instituto o el Organismo Público Local, según la elección que lo motive, dispondrá su publicación en el Diario Oficial de la Federación o en el órgano de difusión oficial local, según corresponda. (Lo resaltado es propio).

Para el análisis de las disposiciones transcritas —así como las contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electoral y la ley comicial local—, sólo se atenderán aquellas que regulan el registro de candidatos postulados por las coaliciones en el ámbito local, y no aquellas que establecen requisitos para la constitución de las coaliciones, pues el cumplimiento de estos últimos preceptos ya fue examinado al momento de aprobar el registro del convenio de coalición, así como al resolver la solicitud de modificaciones a dicho convenio, que dieron lugar a los acuerdos referidos en los resultados cuarto y quinto del presente acuerdo.

Así, es innecesario someter nuevamente a análisis disposiciones que ya fueron materia de estudio en los acuerdos antes aludidos, pues hacerlo atentaría contra los derechos de los propios partidos coaligados, ya que estos no tendrían certeza jurídica sobre los derechos y obligaciones que ya les fueron reconocidos por este Consejo General. Tiene aplicación por analogía la siguiente tesis:

COSA JUZGADA. AL CONSTITUIR UN DERECHO HUMANO A LA SEGURIDAD JURÍDICA PROTEGIDO POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y POR LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 25, NUMERALES 1 Y 2 DE ÉSTA.

De conformidad con el artículo 25, numerales 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro que sea efectivo, que la ampare contra actos que violenten sus derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución, la ley y la citada convención. Los Estados Parte se comprometen a decidir sobre los derechos de quien interponga algún recurso y garantizar el cumplimiento de lo que ahí se decida. Sin embargo, la regulación de este derecho no es obstáculo para considerar que la aplicación de la figura jurídica de la cosa juzgada es transgresora de las prerrogativas consagradas en dichas disposiciones, pues la finalidad de ésta consiste en que exista certeza respecto de las cuestiones resueltas en los litigios, mediante la invariabilidad de lo fallado en una sentencia ejecutoria, ante el riesgo de que al tramitarse un nuevo juicio en el que se ventilen las mismas cuestiones que en el anterior, por los mismos sujetos y conforme a similares causas, se pronuncien sentencias contradictorias con la consecuente alteración de la estabilidad y seguridad de los contendientes en el goce de sus derechos, lo cual también constituye un derecho humano consistente en la seguridad jurídica protegido por la Constitución y por la referida Convención Americana.

En ese sentido, la regla establecida en el quinto párrafo del artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos se encuentra cumplida por la coalición flexible “JUNTOS PARA SERVIR”, toda

vez que los candidatos que conforman las planillas que se postulan para integrar los miembros de los ayuntamientos de Apaseo el Grande, Atarjea, Celaya, Coroneo, Guanajuato, Irapuato, León, Manuel Doblado, Pénjamo, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende y Tierra Blanca, no han sido registrados como candidatos de algún partido político.

Cabe señalar que las disposiciones previstas en los párrafos tercero, cuarto y sexto del artículo 87 de la citada ley, no pueden ser materia de análisis toda vez que establecen restricciones a los partidos políticos cuando estos registren candidatos por su cuenta y, en el presente acuerdo, sólo se analizan las solicitudes de registro de candidatos presentadas por la coalición, esto sin perjuicio de que las prohibiciones contenidas en dichas hipótesis normativas deben ser atendidas por los partidos políticos que registren candidatos por su propia cuenta.

Ahora bien, por lo que hace a las disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no se encuentra norma alguna que se deba de verificar, en virtud de que las normas que regulan el procedimiento de registro de candidatos están destinadas a regular las elecciones federales, según se desprende del propio nombre del título segundo en el que se encuentran insertas, el cual es "De Los Actos Preparatorios De La Elección Federal".

Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral, mediante acuerdo INE/CG308/2014, aprobó los lineamientos que deberán observar los organismos públicos locales electorales respecto las solicitudes de registro de convenios de coalición para los procesos electorales locales 2014-2015, los cuales son del contenido siguiente:

1. Los criterios establecidos en los presentes Lineamientos son aplicables y obligatorios para las diversas modalidades posibles de coalición previstas en la Ley General de Partidos Políticos, a saber:

a) Coalición total para postular a la totalidad de los candidatos en un mismo Proceso Electoral Local, bajo una misma Plataforma Electoral.

b) Coalición parcial para postular al menos el 50% de las candidaturas en un mismo Proceso Electoral Local, bajo una misma Plataforma.

c) Coalición flexible se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular al menos el 25% de las candidaturas en un mismo Proceso Electoral Local, bajo una misma Plataforma Electoral.

d) La calificación de coaliciones en totales, parciales y flexibles sólo aplica tratándose de cuerpos colegiados electos por el principio de mayoría relativa, como son los integrantes del órgano legislativo y de los Ayuntamientos o Titulares de los Órganos Político-Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. La coalición de Gobernador o Jefe de Gobierno no puede ubicarse dentro de alguno de los supuestos de coalición mencionados, en razón de la unicidad del candidato y la entidad federativa para la que se postula y vota.

e) Cuando dos o más partidos se coaligan en forma total para las elecciones de Diputados Locales o de Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán coaligarse para la elección de Gobernador o Jefe de Gobierno. Esta regla no operará de manera inversa ni en el caso de postular a la totalidad de candidatos para las elecciones de Ayuntamientos o Titulares de los Órganos Político- Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

f) Dos o más partidos políticos se pueden coaligar para postular candidato a la elección de Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, sin que ello conlleve como requisito que participen coaligados para otras elecciones en el mismo Proceso Electoral Local.

g) El principio de uniformidad que aplica a las coaliciones implica la coincidencia de integrantes y en una actuación conjunta en el registro de las candidaturas para las elecciones en las que participen de este modo.

h) El porcentaje mínimo que se establece para las coaliciones parciales o flexibles, se relaciona con candidaturas de un mismo cargo de elección popular, sea de Diputados Locales o Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, o bien, de Ayuntamientos o Titulares de los Órganos Político-Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Para efectos de cumplir con el porcentaje mínimo establecido para las coaliciones parciales o flexibles, en ningún caso, se podrán sumar candidaturas para distintos cargos de elección popular.

i) Para efectos de cumplir el porcentaje mínimo que se establece respecto de las coaliciones parciales o flexibles, en caso de que el resultado del cálculo de este porcentaje respecto del número de cargos en cuestión resulte un número fraccionado, siempre se tomará como cifra válida el número entero siguiente. Lo anterior, de conformidad con el cuadro indicado en el Lineamiento 2.

j) Para efectos de la prerrogativa de acceso a radio y televisión se entenderá como coalición total exclusivamente aquella que postule a la totalidad de las candidaturas de todos los cargos que se disputan en un Proceso Electoral Local. Esta coalición conlleva la conjunción de las coaliciones totales de los distintitos cargos de elección en disputa y, en su caso, del Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, según corresponda.

2. Para obtener el número de candidatos a Diputados Locales o de Diputados a la Asamblea Legislativa y/o Ayuntamientos o Titulares de los Órganos Político Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en cada una de las modalidades señaladas con anterioridad, es necesario considerar el número de cargos a elegir en cada entidad federativa; situación que se detalla a continuación:

Entidad Federativa	Tipo de Elección	No. de Cargos	Mínimo Parcial	Mínimo Flexible
Baja California Sur	Gobernador			
	Diputados MR	16	8	4
	Ayuntamientos	5	3	2
Campeche	Gobernador			
	Diputados MR	21	11	6
	Ayuntamientos	11	6	3
Chiapas	Diputados MR	24	12	6
	Ayuntamientos	122	61	31
Colima	Gobernador			
	Diputados MR	16	8	4
	Ayuntamientos	10	5	3
Distrito Federal	Diputados MR	40	20	10
	Jefes Delegacionales	16	8	4
Estado de México	Diputados MR	45	23	12
	Ayuntamientos	125	63	32
Entidad Federativa	Tipo de Elección	No. de Cargos	Mínimo Parcial	Mínimo Flexible
Guanajuato	Diputados MR	22	11	6
	Ayuntamientos	46	23	12
Guerrero	Gobernador			
	Diputados MR	28	14	7
	Ayuntamientos	81	41	21
Jalisco	Diputados MR	20	10	5
	Ayuntamientos	125	63	32
Michoacán	Gobernador			
	Diputados MR	24	12	6
	Ayuntamientos	113	57	29
Morelos	Diputados MR	18	9	5
	Ayuntamientos	33	17	9
Nuevo León	Gobernador			
	Diputados MR	26	13	7
	Ayuntamientos	51	26	13
Querétaro	Gobernador			
	Diputados MR	15	8	4
	Ayuntamientos	18	9	5
San Luis Potosí	Gobernador			
	Diputados MR	15	8	4
	Ayuntamientos	58	29	15
Sonora	Gobernador			
	Diputados MR	21	11	6
	Ayuntamientos	72	36	18
Tabasco	Diputados MR	21	11	6
	Ayuntamientos	17	9	5
Yucatán	Diputados MR	15	8	4
	Ayuntamientos	106	53	27

3. Los partidos políticos que busquen coaligarse para el Proceso Electoral 2014- 2015, deberán presentar la solicitud de registro del convenio respectivo al Presidente del Organismo Público Local, y en ausencia de éste, al Secretario Ejecutivo, hasta la fecha en que inicie la etapa de precampañas establecidas en cada entidad federativa, acompañada, al menos, de lo siguiente:

a) Original del Convenio de Coalición en el cual conste firma autógrafa de los Presidentes de los partidos políticos integrantes o de sus órganos de dirección facultados para ello; en todo caso, se podrá presentar copia certificada.

b) Convenio de coalición en formato digital con extensión .doc

c) Documentación que acredite que el órgano competente de cada partido político integrante de la coalición, sesionó válidamente y aprobó:

- participar en la coalición respectiva;

- la Plataforma Electoral;

- postular y registrar, como coalición, a los candidatos a los cargos de Diputados Locales o a la Asamblea Legislativa por el principio de mayoría relativa, Ayuntamientos o Titulares de los Órganos Político-Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y/o Gobernador.

d) Plataforma electoral de la coalición, en medio impreso y en formato digital con extensión .doc

4. Aunado a lo anterior, a fin de acreditar la documentación aludida en el inciso c) del numeral que precede, los partidos políticos integrantes de la coalición, deberán proporcionar original o copias certificadas de lo siguiente:

a) De la sesión celebrada por los órganos de dirección que cuenten con las facultades estatutarias conforme a lo establecido en el artículo 89, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, a fin de aprobar que el partido político contienda en coalición en la elección de Diputados Locales o a la Asamblea Legislativa por el principio de mayoría relativa, Ayuntamientos o Titulares de los Órganos Político- Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y/o Gobernador, anexando la convocatoria respectiva, orden del día, acta o minuta de la sesión, o en su caso, versión estenográfica y lista de asistencia.

b) De la sesión del órgano competente del partido político, en el cual conste que se aprobó convocar a la instancia facultada para decidir la participación en una coalición, incluyendo convocatoria, orden del día, acta o minuta de la sesión, o en su caso, versión estenográfica y lista de asistencia.

c) Toda la información y elementos de convicción adicionales que permitan a la autoridad electoral, verificar que la decisión partidaria de conformar una coalición fue adoptada de conformidad con los Estatutos de cada partido político integrante y que fue aprobada la Plataforma Electoral por el órgano competente.

5. El convenio de coalición, a fin de ser aprobado por el Consejo General del Organismo Público Local e inscrito en el libro respectivo, deberá establecer, indiscutiblemente, de manera expresa y clara lo siguiente:

a) La denominación de los partidos políticos que integran la coalición, así como el nombre de sus representantes legales para los efectos a que haya lugar.

b) La elección que motiva la coalición, especificando su modalidad. En caso de coalición parcial o flexible se precisará el número total de fórmulas de candidatos a postular, así como la relación de los distritos electorales locales y, en su caso, municipios o demarcaciones territoriales para el caso del Distrito Federal, en los cuales contendrán dichos candidatos.

c) El procedimiento que seguirá cada partido político para la selección de los candidatos que serán postulados por la coalición, en su caso, por tipo de elección.

d) El compromiso de los candidatos a sostener la Plataforma Electoral aprobada por los órganos partidarios competentes.

e) El origen partidario de los candidatos a Diputados Locales o a la Asamblea Legislativa de mayoría relativa que serán postulados por la coalición, así como el grupo parlamentario o partido político en el que quedarían comprendidos en caso de resultar electos.

f) La persona que ostenta la representación legal de la coalición, a efecto de interponer los medios de impugnación que resulten procedentes.

g) La obligación relativa a que los partidos políticos integrantes de la coalición y sus candidatos, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se fijen para la referida elección, como si se tratara de un solo partido político.

h) La expresión, en cantidades líquidas o porcentajes, del monto de financiamiento que aportará cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, así como la forma de reportarlo en los informes correspondientes; lo anterior, con apego irrestricto a las disposiciones legales, reglamentarias y a los Lineamientos que al efecto establezcan las autoridades electorales en sus respectivos ámbitos de competencia.

i) El compromiso de aceptar la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión que legalmente corresponda otorgar a la coalición total, bajo las parámetros siguientes: el treinta por ciento del tiempo que corresponda distribuir en forma igualitaria, será utilizado por la coalición como si se tratara de un solo partido político; el setenta por ciento del tiempo que corresponda distribuir en forma proporcional a la votación obtenida en la elección para Diputados Locales inmediata anterior en la entidad federativa de que se trate por cada uno de los partidos coaligados, se distribuirá entre cada partido político bajo los términos y condiciones establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

j) Tratándose de coalición parcial o flexible, el compromiso de cada partido político de acceder a su respectiva prerrogativa en radio y televisión, ejerciendo sus derechos por separado.

k) La forma en que será distribuida la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión que corresponda ejercer a la coalición, entre sus candidatos a Diputados Locales o a la Asamblea Legislativa de mayoría relativa, Ayuntamientos o Titulares de los Órganos Político-Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y/o Gobernador, así como entre los de cada partido, por cada uno de esos medios de comunicación.

6. El Presidente del Organismo Público Local, o en su ausencia, el Secretario Ejecutivo, una vez que reciba las solicitudes de registro del convenio de coalición y la documentación que lo sustente, integrará el expediente respectivo, a efecto de analizar la misma, para lo cual, en todo momento contará con la colaboración de las áreas encargadas de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como de la Fiscalización.

7. En cualquier caso, el Organismo Público Local deberá vigilar que la coalición observe lo establecido en los artículos 233 y 234 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con lo dispuesto por el artículo 3, párrafos 4 y 5 de la Ley General de Partidos Políticos.

8. En todo caso, cada partido integrante de la coalición deberá registrar listas propias de candidatos a Diputados Locales o a la Asamblea Legislativa por el principio de representación proporcional.

9. Cada partido político coaligado conservará su propia representación ante los Consejos de los Organismos Públicos Locales y ante las mesas directivas de casilla.

10. De conformidad con lo estipulado en el artículo 88, párrafo 4 de la Ley General de Partidos Políticos, si la coalición total no registrara todas y cada una de las candidaturas correspondientes dentro del plazo establecido por el Organismo Público Local de la entidad federativa de que se trate, la coalición quedará automáticamente sin efectos, independientemente de que en el convenio se enlisten los nombres de los candidatos.

11. Independientemente de la coalición de que se trate, la presentación de la Plataforma Electoral anexa a los convenios de coalición no exime a los partidos políticos de presentar su propia Plataforma Electoral, en los términos y plazos establecidos en la ley.

12. Debe considerarse en las coaliciones el respeto absoluto al principio de paridad en las candidaturas.

13. El Presidente del Consejo General del Organismo Público Local someterá el proyecto de Resolución respectivo a la consideración de dicho órgano superior de dirección, el que resolverá a más tardar dentro de los diez días siguientes a la presentación del convenio.

14. El convenio de coalición podrá ser modificado o disuelto a partir de su aprobación por el Consejo General del Organismo Público Local y hasta un día antes del inicio del periodo para el

registro de candidatos. Para tales efectos, la solicitud de registro de la modificación deberá acompañarse de la documentación a que se refieren los numerales 3 y 4 de los presentes Lineamientos. En dicha documentación deberá constar la aprobación de la modificación cuyo registro se solicita. Aunado a lo anterior, invariablemente, se deberá anexar en medio impreso con firmas autógrafas el convenio modificado, así como en formato digital con extensión .doc.

15. La modificación del convenio de coalición, en ningún caso podrá implicar el cambio de la modalidad que fue registrada por el Consejo General del Organismo Público Local.

16. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 87, párrafo 11 de la Ley General de Partidos Políticos, una vez concluida la etapa de resultados y declaración de validez de las elecciones de Diputados Locales o de Diputados a la Asamblea Legislativa y/o Ayuntamientos o Titulares de los Órganos Político-Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, terminará la coalición, sin necesidad de declaratoria alguna. Lo anterior, sin menoscabo de que el órgano responsable de la administración de los recursos de la coalición deberá responder ante el área responsable de la fiscalización, en 59 todo lo relativo a la revisión de los informes de los gastos de campaña, en los términos que establezcan, las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como los Lineamientos aprobados para tal efecto.

17. Los Organismos Públicos Locales que en la fecha de aprobación de los presentes Lineamientos tengan en curso el proceso de solicitud, revisión de requisitos o aprobación de coaliciones para el Proceso Electoral 2014-2015, deberán acordar lo conducente a efecto de que: a) Los solicitantes presenten aquella documentación a que se refieren estos Lineamientos y que no se haya presentado en la solicitud de registro de la coalición; y b) El Acuerdo que, en su caso, otorgue el registro a la coalición, se ajuste a los presentes Lineamientos.

18. Los Organismos Públicos Locales Electorales que de manera previa a la fecha de aprobación de los presentes Lineamientos hayan aprobado el registro de coaliciones para el Proceso Electoral 2014-2015, podrán acordar lo conducente a efecto de que dichas coaliciones presenten aquella documentación a que se refieren estos Lineamientos y que no se haya presentado en la solicitud de registro de la coalición.

(Lo resaltado es propio).

Por las razones expresadas anteriormente, las normas que esta autoridad electoral debe analizar son aquellas atinentes al registro de candidatos por la coalición, las cuales se resaltaron en negritas.

Por lo que hace al lineamiento número 1, en su inciso g), la coalición cumple con dicho principio, en virtud de que los partidos coaligados no forman parte de alguna otra coalición; además — como se especificó en el análisis de cada una de las solicitudes de registro de candidatos presentas por la coalición—, la coalición solicitó de manera conjunta el registro de los candidatos elegidos por el principio de mayoría relativa de los ayuntamientos de Apaseo el Grande, Atarjea, Celaya, Coroneo, Guanajuato, Irapuato, León, Manuel Doblado, Pénjamo, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende y Tierra Blanca.

Asimismo, el lineamiento número 10 se encuentra satisfecho, toda vez que las solicitudes de registro de las planillas de candidatos a conformar los miembros de los ayuntamientos antes señalados, fueron presentadas dentro del periodo establecido en el artículo 188, fracción IV, de la ley electoral estatal, esto es, del veinte al veintiséis de marzo del año de la elección. Dato que quedó especificado en el análisis de cada una de las solicitudes de registro de candidatos.

De igual forma, las solicitudes de registro de planillas presentadas por la coalición cumplen con lo previsto en el lineamiento 12, en virtud de que —como quedó especificado en el análisis de cada una de las solicitudes de registro de planillas de candidatos— la lista de candidatos a regidores se integra por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y se alternan las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar la lista.

En cuanto a las disposiciones de la ley electoral local en las que se regula las coaliciones no procede realizar ningún estudio, en razón de las consideraciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo referente a la invalidez formal de toda regulación sobre coaliciones que se contenga en las leyes de las entidades federativas.

Las consideraciones del Máximo Tribunal del país se encuentran visibles en las páginas 124 a 126 de la sentencia que resuelve las acciones de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014, y que son del tenor siguiente:

El régimen de coaliciones aplicable tanto a procesos federales como locales, por disposición constitucional, debe ser regulado por el Congreso de la Unión en la ley general que expida en materia de partidos políticos; sin que las entidades federativas cuenten, por tanto, con atribuciones para legislar sobre dicha figura.

De este modo, la Ley General de Partidos Políticos, expedida por el Congreso de la Unión mediante Decreto publicado en el Diario Oficial el veintitrés de mayo de dos mil catorce, en el Capítulo II 'De las Coaliciones' (artículos 87 a 92) del Título Noveno 'De los Frentes, las Coaliciones y las Fusiones', prevé las reglas a las que deberán sujetarse los partidos que decidan participar bajo esta modalidad en los procesos electorales federales y locales; sin asignar a las entidades federativas facultad alguna para legislar en torno a algún aspecto no contemplado por dicha ley respecto de tal figura.

Consecuentemente, las entidades federativas no se encuentran facultadas, ni por la Constitución, ni por la Ley General, para regular cuestiones relacionadas con las coaliciones, ni siquiera incorporando en su legislación disposiciones establecidas en tales ordenamientos sobre esta figura, ya que el deber de adecuar su marco jurídicoelectoral, impuesto por el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley General de Partidos Políticos, no requiere la reproducción de dichas disposiciones a nivel local, si se considera que la citada ley es de observancia general en todo el territorio nacional.

Por tanto, toda regulación sobre coaliciones que se contenga en las leyes de las entidades federativas será inválida desde un punto de vista formal, por incompetencia de los órganos legislativos locales.

Lo anterior no impide a los Estados y al Distrito Federal legislar sobre aspectos electorales que se relacionen de manera indirecta con el tema de coaliciones, como la forma en que operará el principio de representación proporcional al interior de los órganos legislativos locales, en términos de los artículos 116, fracción II y 122, apartado C, base primera, fracción III, de la Constitución Federal; por lo que, en cada caso concreto, deberá definirse qué es lo que regula la norma, a fin de determinar si la autoridad que la emitió es o no competente para tales efectos.

Con base en los argumentos contenidos en el presente considerando, se concluye que los candidatos postulados por la coalición flexible "JUNTOS PARA SERVIR" satisfacen los requisitos de elegibilidad señalados tanto en los artículos 110 y 111 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, como en los artículos 11 y 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, y que se cumple lo dispuesto en los artículos 189, fracción III, y 190 de la propia ley.

Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31, párrafo segundo, y 17, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 77, párrafos primero y segundo, 81, 82, párrafo primero, 92, fracción XXV, 184, 185, párrafos primero y segundo, 188, fracción IV, y penúltimo párrafo, 189, fracción III, y 191, párrafo sexto, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, se somete a la consideración del Consejo General, el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. Se registran las planillas de candidatos a miembros de los ayuntamientos de Apaseo el Grande, Atarjea, Celaya, Coroneo, Guanajuato, Irapuato, León, Manuel Doblado, Pénjamo, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende y Tierra Blanca, postuladas por la coalición "JUNTOS PARA SERVIR", para contender en la elección ordinaria del siete de junio del presente año, planillas cuya integración consta en los doce anexos de este acuerdo.

SEGUNDO. Comuníquense el presente acuerdo y el anexo correspondiente a los consejos municipales electorales de Apaseo el Grande, Atarjea, Celaya, Coroneo, Guanajuato, Irapuato, León, Manuel Doblado, Pénjamo, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende y Tierra Blanca, para los efectos legales a que haya lugar.

TERCERO. Publíquense las planillas de candidatos a miembros de los ayuntamientos de Apaseo el Grande, Atarjea, Celaya, Coroneo, Guanajuato, Irapuato, León, Manuel Doblado, Pénjamo, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende y Tierra Blanca, postuladas por la coalición flexible "JUNTOS PARA SERVIR", para contender en la elección ordinaria del siete de junio del presente año, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

CUARTO. Remítase copia certificada del presente acuerdo y sus anexos a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del 62 Instituto Nacional Electoral, por

conducto del Vocal Ejecutivo Local en el estado de Guanajuato, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por estrados. Con apoyo en lo previsto por los artículos 93, fracción IV, y 98, fracción VII, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, firman este acuerdo el Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y el Secretario Ejecutivo.

CUARTO.- Ocurso impugnativo.- En el escrito que da origen al recurso de revisión que ahora se analiza, se expresó lo siguiente:

ASUNTO: SE INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DEL ACUERDO CGIEEG/033/2015 APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, POR EL QUE APROBÓ EL REGISTRO DE DIVERSAS PLANILLAS A INTEGRANTES DE AYUNTAMIENTOS POSTULADAS POR LA COALICIÓN “JUNTOS PARA SERVIR”.

**H.MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ESTATAL
ELECTORAL DE GUANAJUATO
P R E S E N T E**

LIC. MARIO ALONSO GALLAGA PORRAS, en mi calidad de Representante del Partido Acción Nacional en el Estado de Guanajuato ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, personería que acredito con la certificación expedida por el Secretario Ejecutivo de dicho organismo electoral y que acompaño al presente ocurso como **anexo uno**, señalando como domicilios para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en Zaragoza No. 5-A primer casa Fraccionamiento Lomas de Zaragoza atrás del Registro Agrario Nacional, de esta ciudad de Guanajuato, Capital, autorizando para oír y recibir notificaciones a los CC. Lics. J Jesús Correa Ramírez y Luis Alberto Rojas Rojas, Jorge Fernando Valencia Gallo, Leopoldo Edgardo Jiménez Soto, Miryam Eulalia Oliva Córdova y Claudia Imelda Jasso Hernández, ante este H. Tribunal Electoral, con el debido respeto comparezco para exponer:

Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 396, fracción IV, 397 y 398 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, acudo a interponer **RECURSO DE REVISIÓN**, contra el Acuerdo **CGIEEG/033/2015**, por el que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, aprobó el registro de planillas de candidatos a integrar los ayuntamientos de: **Apaseo el Grande, Atarjea, Celaya, Coroneo, Guanajuato, Irapuato, León, Manuel Doblado, Pénjamo, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende y Tierra Blanca**, postulados por la Coalición “JUNTOS PARA SERVIR” conformada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, por los actos que más adelante se expresan, de acuerdo a las consideraciones que se plantean en el presente recurso.

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN

Este recurso es oportuno en virtud de que fue en la sesión de fecha cuatro de abril de dos mil quince cuando el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, aprobó el registro de planillas de candidatos a integrantes de ayuntamientos a que se hace referencia en este medio de impugnación, postulados por la Coalición “JUNTOS PARA SERVIR” conformada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva

Alianza, por lo que en los términos del artículo 397, primer párrafo de la ley comicial de la entidad, el plazo para interponer el presente recurso de revisión vence hasta el día nueve de abril de dos mil quince.

LEGITIMACIÓN DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL PARA LA INTERPOSICIÓN DEL PRESENTE RECURSO DE REVISIÓN

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; y 1 y 20 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, resulta de interés público y observancia de las autoridades electorales y partidos políticos, el cumplimiento a los principios de certeza, imparcialidad, legalidad y equidad en la contienda, que rigen en materia electoral, y al tratarse de un asunto en donde la determinación tomada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en el acuerdo que aquí se impugna, resulta ilegal como se acreditará más adelante, es que el partido que represento tiene legitimación para interponer el presente recurso.

I.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL PROMOVENTE.

El nombre y domicilio son los señalados en el proemio del presente escrito y que solicito por economía procesal se tengan por reproducidos como si al efecto se insertaran.

II.- EXPRESAR EL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADO.

Se impugna el acuerdo **CGIEEG/033/2015** aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en sesión celebrada el cuatro de abril de dos mil quince, por el que aprobó el registro de planillas de candidatos a integrar los ayuntamientos de: **Apaseo el Grande, Atarjea, Celaya, Coroneo, Guanajuato, Irapuato, León, Manuel Doblado, Pénjamo, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende y Tierra Blanca**, postulados por la Coalición "JUNTOS PARA SERVIR" conformada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.

III.- SEÑALAR EL ORGANISMO ELECTORAL DEL CUAL PROVIENE EL ACTO O RESOLUCIÓN.

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, con domicilio en carretera Guanajuato-Puentecillas km.2+767 de la ciudad de Guanajuato capital.

IV. INDICAR LOS ANTECEDENTES DEL ACTO O RESOLUCION DE LOS QUE TENGA CONOCIMIENTO EL PROMOVENTE.

1. El día siete de octubre de dos mil catorce, dio inicio el proceso electoral local del Estado de Guanajuato 2014-2015, para renovar a los integrantes de los cuarenta y seis ayuntamientos de la entidad, así como a los diputados del Congreso del Estado.

2. Dentro del periodo comprendido del 20 al 26 de marzo de dos mil quince, la Coalición "JUNTOS PARA SERVIR" conformada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, presentó ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, solicitudes de registro de planillas para integrantes de ayuntamientos de: **Apaseo el Grande, Atarjea, Celaya, Coroneo, Guanajuato, Irapuato, León, Manuel Doblado, Pénjamo, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende y Tierra Blanca**.

3. El día sábado cuatro de abril de dos mil quince, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en Sesión Especial, aprobó el registro de planillas de candidatos a integrar los ayuntamientos de: **Apaseo el Grande, Atarjea, Celaya, Coroneo, Guanajuato, Irapuato, León, Manuel Doblado, Pénjamo, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende y Tierra Blanca**, postulados por la Coalición "JUNTOS PARA SERVIR" conformada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.

V.- INDICAR LOS PRECEPTOS LEGALES QUE CONSIDERE VIOLADOS.

Se violan en perjuicio del Partido Político que represento los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 77, 190, 191 y 194 fracción I, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

VI.- EXPRESION DE LOS AGRAVIOS QUE CAUSE EL ACTO O RESOLUCION IMPUGNADOS.

AGRAVIO. Causa agravio al Partido que represento, la determinación tomada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por la cual aprobó el registro de las planillas de candidatos a integrantes de los ayuntamientos de: **Apaseo el Grande, Atarjea, Celaya, Coroneo, Guanajuato, León, Manuel Doblado y San Miguel de Allende**, lo anterior toda vez que los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, integrantes de la Coalición "JUNTOS PARA SERVIR", pretendieron subsanar fuera del plazo en el que legalmente tenían que hacerlo, diversos requisitos vinculados a sus solicitudes de registros de candidatos a integrantes de ayuntamientos; así como sustituir, también fuera del plazo en el que legalmente podían hacerlo, a diversos candidatos por resultar éstos inelegibles para poder ser postulados al cargo para el cual buscaron ser registrados.

La extemporaneidad en el cumplimiento de requisitos, así como la sustitución de candidatos también fuera de plazo, se demuestran con los acuses de recibo de los escritos con los que los partidos políticos integrantes de la Coalición "JUNTOS PARA SERVIR" pretendieron dar cumplimiento a los requerimientos que le fueron formulados por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Requerimientos y contestación a los mismos, que en copia certificada incorporo al cuerpo de este curso, como prueba de mi parte, y que contienen todas y cada una de las omisiones y señalamientos sobre candidatos inelegibles que postularon los partidos políticos integrantes de la Coalición, así como las fechas en que los requerimientos fueron formulados y las fechas en que los mismos fueron atendidos, y que se desarrollan en la siguiente tabla:

NO. REQUERIMIENTO	PARTIDO OMISO EN REQUISITOS	PARTIDO OMISO EN REQUISITOS	MUNICIPIO	FECHA EN QUE SE FORMULO	FECHA EN QUE SE ATENDIO EL REQUERIMIENTO	SINTESIS CONTENIDO DEL REQUERIMIENTO
68	COALICIÓN	PRI	CORONEO	29 DE MARZO A LAS 23:19 P.M	NO APARECE	LISTA DE CANDIDATOS Y CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE PARIDAD
82	COALICIÓN	NUEVA ALIANZA	GUANAJUATO	29 DE MARZO A LAS 23:05 P.M	31 DE MARZO A LAS 17:55 P.M	CARTA ACEPTACIÓN CANDIDATURA 3 REGIDOR SUPLENTE
112	COALICIÓN	NUEVA ALIANZA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	29 DE MARZO A LAS 23:05 P.M	31 DE MARZO A LAS 17:55 P.M	COPIA DE CREDENCIAL DE ELECTOR DEL 8 REGIDOR PROPIETARIO
126	COALICIÓN	PRI	CELAYA	29 DE MARZO A LAS 23:19P.M	31 DE MARZO A LAS 18:25 P.M	SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A 5 REGIDOR SUPLENTE INELEGIBLE (EDAD)
131	COALICIÓN	PRI	LEÓN	29 DE MARZO A LAS 23:19 P.M	31 DE MARZO A LAS 18:10 P.M	DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE CANDIDATURA 8 REGIDOR SUPLENTE
132	COALICIÓN	NUEVA ALIANZA	ATARJEJA	29 DE MARZO A LAS 23:05 P.M	31 DE MARZO A LAS 23:00 P.M	COPIA CERTIFICADA ACTA DE NACIMIENTO Y DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR 2 REGIDOR PROPIETARIO; CONSTANCIA PADRON ELECTORAL 5 REGIDOR PROPIETARIO
143	COALICIÓN	NUEVA ALIANZA	APASEO EL GRANDE	29 DE MARZO A LAS 23:05 P.M	31 DE MARZO A LAS 18:10 P.M	INSCRIPCIÓN AL PADRON 1 REGIDOR PROPIETARIO; CONSTANCIA DE RESIDENCIA 6 REGIDOR PROPIETARIO Y SUPLENTE; Y CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN AL PADRON DEL 6 REGIDOR PROPIETARIO
144	COALICIÓN	NUEVA ALIANZA	MANUEL DOBLADO	29 DE MARZO A LAS 23:05 P.M	NO PRESENTAN CONTESTACIÓN AL REQUERIMIENTO	Ocupación de candidatos a 2 Regidor Propietario y suplente
165	COALICIÓN	PVEM	GUANAJUATO	29 DE MARZO A LAS 23:03 P.M	31 DE MARZO A LAS 19:21 P.M	CON QUE CARÁCTER DE REGISTRAN LAS CANDIDATAS A LA 4 REGIDURÍA, YA QUE AMBOS INTEGRANTES DE LA FÓRMULA SE POSTULAN PARA REGIDORAS SUPLENTE
166	COALICIÓN	PVEM	CORONEO	29 DE MARZO A LAS 23:04 P.M	31 DE MARZO A LAS 19:00 P.M	ACLARAR OCUPACIÓN DEL 5 REGIDOR SUPLENTE
167	COALICIÓN	NUEVA ALIANZA	CORONEO	29 DE MARZO A LAS 23:05 P.M	31 DE MARZO A LAS 18:03 P.M	SUSTITUCIÓN DE CANDIDATOS A 2 REGIDORE SUPLENTE (RESIDENCIA); 5 REGIDOR PROPIETARIO INELEGIBLE (EDAD); ACEPTACIÓN DE CANDIDATURA 3 Y 8 REGIDOR SUPLENTE; LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO 5 REGIDOR SUPLENTE; COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO Y CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN AL PADRÓN ELECTORAL DEL 5 REGIDOR SUPLENTE Y 6 REGIDOR PROPIETARIO; CONSTANCIA DE RESIDENCIA DEL 6 REGIDOR PROPIETARIO

La extemporaneidad en el cumplimiento de requisitos, así como la extemporaneidad en la sustitución de candidatos, resulta evidente, toda vez que como se observa con meridiana claridad el Partido Revolucionario Institucional, como el Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, presentaron fuera del plazo que legalmente tenían para hacerlo, escritos por los que pretendían subsanar las omisiones en las que incurrieron desde sus solicitudes de registro; así como también presentaron fuera del plazo sustituciones de candidatos.

Se sostiene lo anterior, porque como esta autoridad jurisdiccional electoral se podrá dar cuenta, en el artículo 191, segundo párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, se dispone la posibilidad de que los partidos políticos o las coaliciones subsanen el o los requisitos omitidos en sus solicitudes de registro de candidatos, o sustituyan a éstos, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que le fueran formulados el o los requerimientos, pero **<<siempre y cuando esto se realice cuatro días antes de la sesión de registro de candidatos>>**, lo que en especie debió haber ocurrido a más tardar el **LUNES 30 DE MARZO** del año en curso –término improrrogable por parte de la autoridad administrativa electoral y que los partidos políticos integrantes de la coalición que fueron requeridos debieron haber tomado en cuenta para dar cumplimiento en tiempo al o los

requerimientos que le fueron formulados, todo ello en estricto apego a la Ley tanto por parte de la autoridad administrativa electoral que formuló los requerimientos, como a la coalición que solicitó el registro de planillas- habida cuenta de que la sesión de Consejo General para aprobar el registro de candidaturas a integrantes de ayuntamientos se celebró el sábado cuatro de abril de dos mil quince, en acatamiento a lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo precitado. Además, por lo que toca a la sustitución de candidatos postulados, es aplicable en lo que al caso interesa, lo dispuesto en el artículo 194, fracción I de la Ley electoral en cita, que dispone el tiempo en que esta se puede válidamente darse, sin que para ello tenga que mediar renuncia de los candidatos, por estar precisamente en la fase de registro de los mismos, se transcriben en lo conducente los artículos precitados.

<<Artículo 191. Recibida una solicitud....

Si de la verificación realizada se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos o que alguno de los candidatos no es elegible, el presidente notificará de inmediato al partido político correspondiente, para que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes subsanen el o los requisitos omitidos o sustituya la candidatura, siempre y cuando esto se realice cuatro días antes de la sesión de registro de candidatos.

Si para un mismo...

Si un ciudadano...

Cualquier solicitud o...

Al noveno día....

Los consejos distritales...

De igual manera...

En el caso...>>.

<<Artículo 194. Para la sustitución de candidatos, los partidos políticos lo solicitarán por escrito al Consejo General, respetando las reglas de paridad y observando las siguientes disposiciones:

I.- Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos podrán sustituirlos libremente;

II a II...

Sólo se podrán sustituir...>>>

La extemporaneidad en el cumplimiento de requisitos y la indebida sustitución de candidatos, atenta contra el sistema de registros que se tiene contemplado en la Ley electoral local, y que de manera puntual dispone los requisitos, etapas y plazos a los que los registros deben ajustarse, quedando a los partidos políticos y a las coaliciones la libertad de decidir el momento en que quieran presentar sus solicitudes de registro de candidaturas, con las consecuencias que trae y debe traer consigo el que decidan hacerlo hasta el último día en que la ley dispone puedan éstos realizarse.

De tal suerte que, si a los partidos políticos o coaliciones se les agotan los tiempos para válidamente subsanar sus omisiones o sustituir a sus candidatos, la consecuencia jurídica no puede ser otra sino la negativa del registro de sus solicitudes, precisamente por haberles prescrito a los partidos políticos o coaliciones el plazo que tenían para subsanar sus omisiones o sustituir a sus candidatos, tal y como lo debió haber acordado el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, certeza, imparcialidad y equidad en la contienda que rigen la materia electoral.

A mayor abundamiento, en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, se dispone claramente la sistemática que aplica en la etapa del registro de candidatos a cargos de elección popular, de tal suerte que en el artículo 188 se establecen los plazos para el registro de los mismos; mientras que en el artículo 191 se encuentran los pasos y términos que rigen el proceder de la autoridad administrativa electoral como consecuencia de la solicitud de registros; los derechos de los partidos políticos que postulan candidatos a subsanar las omisiones que hayan tenido con motivo de sus solicitudes de registro así como a sustituir

candidatos; además de los plazos y términos a los que deben sujetarse tanto la autoridad administrativa electoral como los partidos políticos en materia de registro de candidatos.

En ese sentido, la ley electoral local claramente dispone en el artículo 188, fracción II de la ley electoral en cita, que para el caso de los registros de candidatos a integrantes de los ayuntamientos el periodo de registro de los mismos comprende del 20 al 26 de marzo del año de la elección, asimismo, se contempla en la misma que una vez recibida la solicitud de registro de candidatos la autoridad electoral verificará dentro de los tres días siguientes que se cumplieron todos y cada uno de los requisitos señalados en el artículo 190, y que si de la verificación que realice se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos o que alguno de los candidatos no es elegible, el presidente lo notificará al partido político correspondiente, para que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes subsane el o los requisitos omitidos o sustituya la candidatura, siempre y cuando esto lo realice cuatro días antes de la sesión de registro de candidatos. Continúa disponiendo la ley electoral local, que al noveno día de vencimiento de los plazos a que se refiere el artículo 188 de esa Ley, los órganos electorales que correspondan celebrarán una sesión cuyo único objeto será registrar las candidaturas que procedan.

En el caso que nos ocupa, los partidos político integrantes de la coalición cuyo aprobación de registros se impugna, decidieron de manera libre solicitar el registro de sus candidatos a integrantes de ayuntamientos hasta el día veintiséis de marzo, es decir, el último día del plazo que tenían para hacerlo. A partir de ese momento, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en estricto apego a la normatividad electoral, disponía de tres días para formular requerimientos, es decir, dentro del plazo comprendido del 27, 28 y 29 de marzo, como en la especie lo hizo, a efecto de que los partido políticos requeridos, subsanaran las omisiones en las que incurrió o sustituyera candidatos dentro de las cuarenta y ocho horas, y es aquí en donde los partidos políticos de manera extemporánea cumplieron los requerimientos que le fueron formulados, pues el plazo de cuarenta y ocho horas precitado no debe de ninguna manera entenderse para el caso que nos ocupa y por la dinámica en la que incurrieron los propios partidos políticos integrantes de la Coalición cuya aprobación de registros se impugna, como de cuarenta y ocho horas completas, pues ese plazo está invariablemente ligado a la **CONDICIONANTE** que refiere el segundo párrafo del artículo 191, y que dispone que las omisiones a sus solicitudes de registro o la sustitución de candidatos las que puede efectuar <<siempre y cuando esto lo realice cuatro días antes de la sesión de registro de candidatos>>. De tal suerte que si los requerimientos le fueron formulados el día 29 de marzo, con meridiana claridad se puede concluir que los partidos políticos integrantes de la Coalición requeridos tenían hasta el lunes treinta de marzo para cumplimentar sus requerimientos en estricto apego a que los días 31 de marzo, 1, 2 y 3 de abril, comprenden el bloque de los **CUATRO DÍAS ANTES** de la sesión de registro de candidatos, que en la especie se celebró el día 4 de abril del año en curso, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 191, sexto párrafo de la Ley electoral en cita. De ahí que si los partidos requeridos integrantes de la Coalición dieron contestación a los requerimientos hasta el día treinta y uno de marzo, lo hicieron de manera extemporánea y con ello incumplieron con la parte final del artículo 191, segundo párrafo in fine tantas veces aquí citado, que dispone como se ha dicho supralíneas la **CONDICIONANTE** para que la omisiones subsanadas o las sustituciones pretendidas fueran válidas.

Para mayor claridad en este asunto, se incorpora la siguiente tabla que contiene el cronograma de tiempos que para el caso concreto que nos ocupa, aplican para la resolución de este medio de impugnación.

Fecha en que los partidos políticos integrantes de la Coalición solicitaron el registro de candidatos	Periodo de tres días que tiene la autoridad electoral para verificar cumplimiento de requisitos y formular requerimientos	Periodo de tiempo que en el caso que nos ocupa tenían los partidos políticos integrantes de la Coalición para solventar requerimientos o sustituir candidatos por haber registrado voluntariamente hasta el día 26 de marzo	Periodo de cuatro días antes de la sesión de registro de candidatos	Fecha de la sesión de registro de candidatos
26 de marzo de 2015	27, 28 y 29 de marzo de 2015	30 de marzo de 2015 a más tardar a las 23:59:59	31 de marzo, 1, 2 y 3 de abril de 2015	4 de abril de 2015

Por lo anteriormente argumentado y por ser acorde a derecho en virtud de la sistemática de registro de candidatos que se tiene en la Ley electoral local, es que procede que este Tribunal

Estatut Electoral cancele el registro que en forma contraria a derecho fue dada la cada una de las planillas que se mencionan en este medio de impugnación.

Sirve a lo anterior las siguientes tesis de jurisprudencia emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:

FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. La fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Asimismo señala que las autoridades electorales deberán de gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que en materia electoral el principio de legalidad significa la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo; el de imparcialidad consiste en que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista; el de objetividad obliga a que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, y el de certeza consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas. Por su parte, los conceptos de autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades electorales implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que atacar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural.

Acción de inconstitucional 19/2005. Partido del Trabajo. 22 de agosto de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio. El Tribunal Pleno, el dieciocho de octubre en curso, aprobó, con el número 144/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de octubre de dos mil cinco.

Localización: Novena Época, Instancia: Pleno; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, Noviembre de 2005; Pagina: 111; Tesis: P./J. 144/2005 Jurisprudencia Materia(s): Constitucional.

“PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL.- De conformidad con las reformas a los artículos 41, fracción IV; 99, párrafo cuarto; 105, fracción II y 116, fracción IV, incisos b) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en términos de los artículos 186 y 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 3o. de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se estableció un sistema integral de justicia en materia electoral cuya trascendencia radica en que por primera vez en el orden jurídico mexicano se prevén los mecanismos para que todas las leyes, actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a lo previsto en la Constitución Federal y, en su caso, las disposiciones legales aplicables, tanto para proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos como para efectuar la revisión de la constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos y resoluciones definitivos de las autoridades electorales federales y locales.

Tercera Época:

Jurisprudencia visible en la Revista Justicia Electoral 2002, suplemento 5, páginas 24-25. Sala Superior, tesis número S3ELJ21/2001.
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 173-174”

Asimismo, tiene aplicación el presente asunto a fin de salvaguardar la legalidad electoral, las siguientes jurisprudencias:

Jurisprudencia 2/98, cuyo rubro y texto indican:

<<AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL.- Debe estimarse que los agravios aducidos por los inconformes, en los medios de impugnación, pueden ser desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial, y no necesariamente deberán

contenerse en el capítulo particular de los agravios, en virtud de que pueden incluirse tanto en el capítulo expositivo, como en el de los hechos, o en el de los puntos petitorios, así como el de los fundamentos de derecho que se estimen violados. Esto siempre y cuando expresen con toda claridad, las violaciones constitucionales o legales que se considera fueron cometidas por la autoridad responsable, exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos a través de los cuales se concluya que la responsable o bien no aplicó determinada disposición constitucional o legal, siendo ésta aplicable; o por el contrario, aplicó otra sin resultar pertinente al caso concreto; o en todo caso realizó una incorrecta interpretación jurídica de la disposición aplicada. Lo resaltado es propio.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-107/97. Partido Revolucionario Institucional. 9 de octubre de 1997. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/98. Partido de la Revolución Democrática. 26 de agosto de 1998. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-043/98. Partido del Trabajo. 26 de agosto de 1998. Unanimidad de votos.>>

*También tiene aplicación en la especie los siguientes criterios de nuestro máximo tribunal:

Época: Tercera Época Registro: 49 Instancia: TipoTesis: Jurisprudencia Fuente: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Localización: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, página 5. Materia(s): Electoral Tesis: 3/2000 Pag.(sic) 5 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, página 5.

AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR. En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que recogen los principios generales del derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. Coalición integrada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores. 30 de marzo de 1999. Unanimidad de votos.

VII.- NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS TERCEROS INTERESADOS.

En este recurso, es tercero interesado:

La Coalición "JUNTOS PARA SERVIR", conformada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, con domicilio en Paseo de la Presa No. 37; C.P. 36000; Guanajuato, Guanajuato; Verde Ecologista de México, con domicilio en Calle Praga No. 505; Colonia Andrade; C.P. 37370; León, Guanajuato, y Nueva Alianza, con domicilio en Plaza Marfil, local No. 20; Boulevard Euquerio Guerrero y nuevo acceso a Guanajuato s/n; Colonia Burócratas; Guanajuato, Guanajuato.

VIII.- OFRECIMIENTO DE LAS PRUEBAS Y FUNDAMENTO DE LAS PRESUNCIONALES LEGALES Y HUMANAS QUE SE HAGAN VALER.

PRUEBAS

Anexamos como pruebas documentales de nuestra parte las siguientes:

1.Documental Pública, consistente en la certificación expedida por la Secretaría Ejecutiva del Consejo General que se acompaña como **anexo uno** para acreditar la personería del promovente.

2.Documentales públicas consistentes en los siguientes documentos:

a) Copia Certificada del acuerdo **CGIEEG/033/2015** que contiene la aprobación del registro de candidatos a integrantes de ayuntamientos postulados por la Coalición "JUNTOS PARA SERVIR" conformada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. **Anexo 2.**

b) Solicitud que formuló el partido político que represento al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, para que nos fueran proporcionadas las copias certificadas de todos y cada uno de los requerimientos que esa autoridad administrativa electoral formuló a cada uno de los partidos políticos integrantes de la Coalición "JUNTOS PARA SERVIR" conformada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, con motivo del registro de planillas de candidatos a integrar los ayuntamientos referidos en este ocurso, así como de las copias certificadas de los oficios de contestación que fueron presentados por cada uno de ellos. **Anexo 3.**

3.La Presuncional Legal y Humana, consistente en todo aquello que la ley prevea se actualiza como presupuesto a nuestro favor, en todo lo que beneficie al partido que represento.

Estas pruebas las relaciono en general, con todo el contenido del Recurso de Revisión y para acreditar los hechos que en el mismo se mencionan.

Por lo anteriormente expuesto y fundado en derecho de este H. Tribunal Estatal Electoral, atentamente solicito:

PRIMERO.- Se me tenga por interponiendo en tiempo y forma **RECURSO DE REVISION** en los términos de este escrito.

SEGUNDO.- Se me tenga por ofreciendo como pruebas de mi parte las antes mencionadas.

TERCERO.- Se dicte resolución por la que se **CANCELE** el registro de las planillas de candidatos a integrantes de los ayuntamientos de **Apaseo del Grande, Atarjea, Celaya, Coroneo, Guanajuato, León, Manuel Doblado y San Miguel de Allende**, aprobados indebidamente por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

QUINTO.- Pruebas Dentro del expediente en que se actúa se allegaron los siguientes medios de prueba:

a) Por parte del partido político recurrente:

-Certificación de fecha veintiuno de marzo de dos mil quince, suscrita por el maestro Juan Carlos Cano Martínez, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en la que se refiere que el ciudadano Mario Alonso Gallaga Porras, se encuentra acreditado como representante suplente, del Partido Acción Nacional ante la autoridad administrativa.

-Copia certificada del acuerdo **CGIEEG/033/2015**, aprobado por el Consejo General, en sesión especial

celebrada el día cuatro de abril del año en curso, mediante el cual se registraron las planillas de candidatos a integrar los ayuntamientos de Apaseo el Grande, Atarjea, Celaya, Coroneo, Guanajuato, Irapuato, León, Manuel Doblado, Pénjamo, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende y Tierra Blanca, postuladas por la coalición “Juntos para Servir” compuesta por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.

-Copia certificada de los anexos del precitado Acuerdo CGIEEG/033/2015, consistentes en las planillas de candidatos a integrantes de los ayuntamientos de los municipios citados.

-Original de la solicitud de las copias certificadas ya aludidas, formulada en su momento por el partido político actor a la autoridad administrativa electoral.

b) Por su parte el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, exhibió lo siguiente:

-Certificación del día diez de abril de dos mil quince, firmada por el maestro Juan Carlos Cano Martínez, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, donde se contienen los requerimientos efectuados por la autoridad administrativa a la coalición conformada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, con motivo de la solicitud de registro de candidatos de los municipios multialudidos, así como las contestaciones que en cada caso emitió el instituto político en comento.

c) Finalmente el representante legal de la coalición electoral de los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, terceros interesados exhibió:

- Constancia atinente a la acreditación de su personería Santiago García López, como representante de Partido Revolucionario Institucional.

- Copia certificada del convenio celebrado por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza de fecha 7 de septiembre de 2014.

- Modificaciones parciales al convenio de fecha 7 de septiembre de 2014, celebrado por los institutos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.

SEXTO.- Lineamientos generales. Por cuestión de orden, claridad y sistematización en los lineamientos o criterios jurídicos generales que habrán de observarse en el dictado de la presente resolución, a continuación se establecen los principios procesales que invariablemente se considerarán, a efecto de evitar repeticiones innecesarias en cada uno de los subsecuentes puntos de consideración, haciendo la salvedad, desde luego, de algún otro criterio, tesis relevante o jurisprudencia que sobre la litis planteada pudiese resultar atinente acorde al desarrollo del estudio.

De tal manera, se precisa que la presente resolución jurisdiccional se sujetará irrestrictamente al principio de

congruencia, rector del pronunciamiento de todo fallo judicial, acorde al criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia número **28/2009** publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 5, 2010, páginas 23 y 24, la que establece:

CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA.- El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que toda decisión de los órganos encargados de impartir justicia, debe ser pronta, completa e imparcial, y en los plazos y términos que fijen las leyes. Estas exigencias suponen, entre otros requisitos, la congruencia que debe caracterizar toda resolución, así como la exposición concreta y precisa de la fundamentación y motivación correspondiente. La congruencia externa, como principio rector de toda sentencia, consiste en la plena coincidencia que debe existir entre lo resuelto, en un juicio o recurso, con la litis planteada por las partes, en la demanda respectiva y en el acto o resolución objeto de impugnación, sin omitir o introducir aspectos ajenos a la controversia. La congruencia interna exige que en la sentencia no se contengan consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutive. Por tanto, si el órgano jurisdiccional, al resolver un juicio o recurso electoral, introduce elementos ajenos a la controversia o resuelve más allá, o deja de resolver sobre lo planteado o decide algo distinto, incurre en el vicio de incongruencia de la sentencia, que la torna contraria a Derecho.

Cuarta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-2642/2008 y acumulado.—Actores: Jesús Ortega Martínez y Alfonso Ramírez Cuellar.—Órgano Partidista Responsable: Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática.—12 de noviembre de 2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Alejandro David Avante Juárez, Sergio Dávila Calderón y Genaro Escobar Ambriz.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-17/2009.—Actor: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa del Estado de Sonora.—17 de abril de 2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Julio César Cruz Ricárdez.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-466/2009.—Actor: Filemón Navarro Aguilar.—Órgano Partidista Responsable: Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática.—13 de mayo de 2009.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Jorge Julián Rosales Blanca.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de octubre de dos mil nueve, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Por otra parte, la presente resolución se sujetará de manera invariable al principio de exhaustividad que impone la obligación a los juzgadores, de agotar en la sentencia, todos y cada uno de los

planteamientos hechos valer por las partes, sirviendo de base la tesis de jurisprudencia **12/2001**, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que es del tenor siguiente:

EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE.- Este principio impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones; si se trata de una resolución de primera o única instancia se debe hacer pronunciamiento en las consideraciones sobre los hechos constitutivos de la causa petendi, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o allegados legalmente al proceso, como base para resolver sobre las pretensiones, y si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, es preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos constantes en los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas en ese nuevo proceso impugnativo.

En materia de valoración de los medios de convicción aportados al proceso, al realizar el análisis de las probanzas operará el principio de adquisición procesal en beneficio del más preciso esclarecimiento de la verdad histórica de los hechos sobre los que se suscite controversia jurídica, de conformidad con la tesis relevante emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a la letra dice:

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL.- Los artículos 14, 15 y 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y valoración de las probanzas aportadas en los medios de impugnación, esto es, regulan la actividad probatoria dentro del proceso regido entre otros, por el principio de **adquisición** procesal, el cual consiste en que los medios de convicción, al tener como finalidad el esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva debe ser valorada por el juzgador conforme a esta finalidad en relación a las pretensiones de todas las partes en el juicio y no sólo del oferente, puesto que el proceso se concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia de actos que se desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una controversia. Así, los órganos competentes, al resolver los conflictos sometidos a su conocimiento, deben examinar las pruebas acorde con el citado principio.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-017/97.—Actor: Partido Popular Socialista.—Autoridad responsable: Segunda Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Guanajuato.—27 de mayo de 1997.—Unanimidad de votos.—Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.—Secretarios: Esperanza Guadalupe Farías Flores y Roberto Ruiz Martínez.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-356/2007.—Actora: Coalición “Movimiento Ciudadano”.—Autoridad responsable: Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz.—19 de diciembre de 2007.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios Enrique Figueroa Ávila y Paula Chávez Mata.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-488/2008.—Actora: Juana Cusi Solana.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Distrito Federal.—14 de agosto de 2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Mauricio Iván del Toro Huerta.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinte de noviembre de dos mil ocho, aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12.

Por tanto, todas las pruebas que obren en el sumario, con independencia de la parte procesal que las hubiere aportado, serán analizadas y valoradas a efecto de sustentar la decisión jurisdiccional, con el valor probatorio que en su momento para cada una de ellas se precisará.

Por otro lado, este organismo jurisdiccional considera pertinente precisar, que el presente recurso de revisión, es un medio de impugnación de estricto derecho, en el cual se deben cumplir, indefectiblemente, determinados principios y reglas previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado y en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

Por ende, en los recursos que atañen a la presente naturaleza este organismo jurisdiccional no puede suplir las deficiencias u omisiones en los conceptos de agravio.

En efecto, si bien para la expresión de conceptos de agravios, esta Sala Superior ha admitido que, se pueden tener por formulados, independientemente de su ubicación en cierto capítulo o sección de la demanda, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o utilizando cualquier fórmula deductiva o inductiva, también es cierto que, como requisito indispensable, se debe expresar con claridad la causa de pedir, detallando el agravio o daño que ocasiona el acto o resolución impugnado y, los motivos que lo originaron.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2/98, cuyo rubro y texto indican:

AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL.

Debe estimarse que los agravios aducidos por los inconformes, en los medios de impugnación, pueden ser desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial, y no necesariamente deberán contenerse en el capítulo particular de los agravios, en virtud de que pueden incluirse tanto en el capítulo expositivo, como en el de los hechos, o en el de los puntos petitorios, así como el de los fundamentos de derecho que se estimen violados. Esto siempre y cuando expresen con toda claridad, las violaciones constitucionales o legales que se considera fueron cometidas por la autoridad responsable, exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos a través de los cuales se concluya que la responsable o bien no aplicó determinada disposición constitucional o legal, siendo ésta aplicable; o por el contrario, aplicó otra sin resultar pertinente al caso concreto; o en todo caso realizó una incorrecta interpretación jurídica de la disposición aplicada. Lo resaltado es propio.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-107/97. Partido Revolucionario Institucional. 9 de octubre de 1997. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/98. Partido de la Revolución Democrática. 26 de agosto de 1998. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-043/98. Partido del Trabajo. 26 de agosto de 1998. Unanimidad de votos.

Al tenor de todo lo expresado, procede pues el análisis de los agravios planteados por el promovente, a efecto de procurar una adecuada tutela judicial de los valores democráticos

característicos de nuestro sistema electoral, reconocidos por las normas constitucionales y legales que conforman la normativa a que habrá de sujetarse el presente fallo, conforme a lo establecido por la siguiente jurisprudencia:

“PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL. De conformidad con las reformas a los artículos 41, fracción IV; 99, párrafo cuarto; 105, fracción II y 116, fracción IV, incisos b) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en términos de los artículos 186 y 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 3o. de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se estableció un sistema integral de justicia en materia electoral cuya trascendencia radica en que por primera vez en el orden jurídico mexicano se prevén los mecanismos para que todas las leyes, actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a lo previsto en la Constitución Federal y, en su caso, las disposiciones legales aplicables, tanto para proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos como para efectuar la revisión de la constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos y resoluciones definitivos de las autoridades electorales federales y locales.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-085/97. Partido Acción Nacional. 5 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-460/2000. Partido Acción Nacional. 29 de diciembre de 2000. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-009/2001. Partido de Baja California. 26 de febrero de 2001. Unanimidad de votos.

Revista Justicia Electoral 2002, suplemento 5, páginas 24-25, Sala Superior, tesis S3ELJ 21/2001.”

SEPTIMO.- Síntesis y clasificación de agravios. Con el fin de delimitar lo que es materia de estudio en la presente sentencia y para estar en posibilidad de atender de forma correcta los argumentos de inconformidad aducidos por el incoante en su escrito de revisión, se sintetiza el agravio:

A.- Se distinguen dos disensos diferentes:

I.- El instituto político actor expone, que con motivo de la solicitud de registros de candidatos presentados por la coalición “Juntos para Servir” conformada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, para contender en la elección de diversos municipios de

nuestro Estado, se efectuaron diversas observaciones por el órgano electoral competente.

Que no obstante, los requerimientos fueron cumplidos oportunamente por su adversario político, se trasgredió lo dispuesto en el artículo 191, segundo párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, porque en dicho cumplimiento, no se observó la anticipación que exige el dispositivo legal en cita; es decir, que el cumplimiento fuera dentro de los 4 días anteriores, a la realización de la sesión del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, para determinar la procedencia o no de los registros.

II.- El instituto político impugnante, plantea que las sustituciones realizadas por el instituto político postulante en los cumplimientos a los requerimientos formulados, devienen igualmente extemporáneos al ser contrarios a lo previsto en la fracción I del artículo 194 de la ley electoral local.

OCTAVO. Estudio de fondo. Se aborda el estudio del agravio, en el mismo orden en que se presentó en la síntesis del considerando que antecede.

A.- El estudio de agravio y los dos motivos de inconformidad que contiene, trae como resultado lo siguiente:

I.- Como se adelantó, el instituto político actor sostiene, que el cumplimiento dado por por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza integrantes de la coalición “Juntos para Servir”, a los requerimientos efectuados por la autoridad administrativa para

lograr el registro de sus candidatos, resulta extemporáneo, porque no se dio antes de los 4 días previos a la realización de la sesión del Consejo General, lo que a juicio de la parte actora, transgrede lo dispuesto en el segundo párrafo, del artículo 191 de la Ley Comicial del Estado.

Tal planteamiento, a juicio de esta autoridad jurisdiccional, debe considerarse **infundado**, por las razones siguientes:

Atentos a la interpretación que el partido político recurrente, pretende dar a la porción normativa enunciada, se considera indispensable, establecer algunos planteamientos iniciales, entorno a la naturaleza del derecho político-electoral a ser votado; sus límites y requisitos; así como la forma en que deben interpretarse las normas atinentes al ejercicio de tal derecho fundamental.

Establece el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la propia Carta Magna, y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, así como de las garantías para su protección, **cuyo ejercicio no podrá restringirse**, ni suspenderse, salvo en los casos que la Constitución establece.

A su vez, el párrafo tercero del mismo dispositivo, establece la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad.

En armonía con lo anterior, el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, establece que los Estados parte, se comprometen a respetar los derechos y libertades, y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona.

Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "*Castañeda Gutman vs Estados Unidos Mexicanos*" al interpretar el contenido del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, precisó que los derechos políticos son derechos humanos de importancia fundamental dentro del sistema interamericano, que se relacionan estrechamente, con otros derechos consagrados en la Convención Americana, como la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación y que, en conjunto, hacen posible el juego democrático.

Por tanto, existe la obligación de garantizar, con medidas positivas, que toda persona titular de derechos políticos, tenga la oportunidad real para ejercerlos, por lo que es indispensable que el Estado genere las condiciones y mecanismos óptimos para que estos derechos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación.

Ahora bien, del contenido de la fracción II, del artículo 35 de la Constitución Federal, se deriva **uno de los derechos fundamentales: el ser votado.**

También, el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos previene, en su párrafo 2, el derecho de los ciudadanos a ser electos para acceder a las funciones públicas de un país; y, por su parte, el artículo 25, párrafo 1, inciso b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que todos los ciudadanos gozarán del derecho y la oportunidad de ser elegidos en elecciones periódicas y auténticas realizadas por sufragio universal e igual, y por el voto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.

De acuerdo a lo anterior, puede afirmarse que el derecho político-electoral del ciudadano a ser votado, es uno de los derechos básicos fundamentales, que tiene rango constitucional y convencional, esto es, en las normas de mayor jerarquía dentro de nuestro sistema jurídico.

No obstante, el mencionado derecho no debe entenderse en sentido absoluto, pues se encuentra sujeto al cumplimiento de las regulaciones o limitaciones previstas legalmente, según lo dispone el artículo 35 de la Constitución Federal, donde se establece el imperativo de cumplir con los requisitos que establezcan las leyes, para poder ser votados, siempre y cuando éstos no impidan u obstruyan indebidamente el ejercicio de los derechos señalados.

Además, el ya mencionado artículo 23, párrafo 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala, que la ley puede reglamentar el ejercicio del derecho a ser votado.

Ahora bien, la cumplimentación de tales requisitos, se justifica por la importancia que revisten los cargos de elección popular, en donde está de por medio la representación para el ejercicio de la soberanía del pueblo, de manera que, con la regulación que al efecto realiza el Constituyente local, buscó garantizar la idoneidad de las personas que aspiran a ocupar tales cargos; así como su participación en la contienda electoral, a través de condiciones de igualdad, mediante exigencias que aseguran la existencia de un vínculo del candidato con el lugar y personas, entre las que se pretende ejercer la función pública de representación ciudadana.

En base a lo anterior, es que el propio constituyente, así como el legislador ordinario, han establecido ciertos requisitos o condiciones necesarios, para que se acepte el registro de las diversas candidaturas, los cuales se han denominado como “requisitos de elegibilidad”.

En el caso de las candidaturas para acceder al cargo de Presidente Municipal, Síndicos o Regidores, los requisitos atinentes, son los que se detallan en los artículos 110 y 111 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, así como en los numerales 11 y 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

Ahora bien, sobre la forma en que deben interpretarse esas normas, relacionadas con el ejercicio del derecho fundamental a ser votado, cabe indicar lo siguiente:

El párrafo segundo, del ya citado artículo 1 Constitucional, establece que la elucidación de las normas que atañen a los derechos fundamentales, debe ser conforme a la propia Norma Suprema y a los Tratados Internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas **la protección más amplia.**

Con base en lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, ha determinado la forma en que puede hacerse efectiva la protección de los derechos humanos en la interpretación y aplicación de las leyes, señalando que debe acudirse a la norma más amplia, o a la **interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos.**

En sentido inverso, estableció la Primera Sala, de nuestro máximo tribunal, que en los casos en los que se establezcan restricciones permanentes al ejercicio de los derechos, debe acudirse a la norma o interpretación mas restringida; y en suma, que ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, donde se involucren los derechos humanos de una persona, debe optarse por la que lo protege en términos más amplios.

Tales principios básicos de interpretación de las normas que involucran derechos fundamentales se plasmaron en la tesis jurisprudencial **1a. XXVI/2012** que establece:

PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL. El segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro personae que es un criterio hermenéutico que informa todo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia,

o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios. Esto implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación del principio pro personae en el análisis de los derechos humanos es un componente esencial que debe utilizarse imperiosamente en el establecimiento e interpretación de normas relacionadas con la protección de la persona, a efecto de lograr su adecuada protección y el desarrollo de la jurisprudencia emitida en la materia, de manera que represente el estándar mínimo a partir del cual deben entenderse las obligaciones estatales en este rubro.¹

Por tanto, al armonizar las reglas de interpretación, de las normas donde se involucra el ejercicio de algún derecho fundamental, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió la jurisprudencia firme **29/2002**, para la materia electoral; precisando que las reglas interpretativas que rigen la determinación del sentido y alcances de una norma, no permiten que se restrinjan o haga nugatorio el ejercicio de un derecho fundamental, como lo son los derechos de asociación, afiliación de votar y **ser votado**, pues por el contrario, toda interpretación y la correlativa aplicación de una norma jurídica deben **ampliar sus alcances jurídicos para potenciar su ejercicio**.

A continuación, el contenido de la trascendente jurisprudencia referida:

DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA. Interpretar en forma restrictiva los derechos subjetivos públicos fundamentales de asociación en materia política y de afiliación política electoral consagrados constitucionalmente, implicaría desconocer los valores tutelados por las normas constitucionales que los consagran, así cabe hacer una interpretación con un criterio extensivo, toda vez que no se trata de una excepción o de un privilegio, sino de derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados, no restringidos ni mucho menos suprimidos. En efecto, los derechos fundamentales de carácter político-electoral consagrados constitucionalmente, como los

¹ Registro: 2000263. Décima Época. Primera Sala. Tesis Aislada. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1. Materia: Constitucional. Tesis: 1a. XXVII/2012 (10a.). Página: 659.

derechos de votar, ser votado, de asociación y de afiliación, con todas las facultades inherentes a tales derechos, tienen como principal fundamento promover la democracia representativa, habida cuenta que, conforme con lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa y democrática. Lo anterior, en virtud de que las reglas interpretativas que rigen la determinación del sentido y alcances jurídicos de una norma no permiten que se restrinja o haga nugatorio el ejercicio de un derecho fundamental, como lo son los de asociación política y de afiliación político-electoral; por el contrario, toda interpretación y la correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus alcances jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que aquélla esté relacionada con un derecho fundamental. Lo anterior, desde luego, no significa en forma alguna sostener que los derechos fundamentales de carácter político sean derechos absolutos o ilimitados.

Recurso de apelación. SUP-RAP-020/2000. Democracia Social, Partido Político Nacional. 6 de junio de 2000. Unanimidad de votos.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-117/2001. José Luis Amador Hurtado. 30 de enero de 2002. Mayoría de cinco votos. Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo en consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la presente tesis.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-127/2001. Sandra Rosario Ortiz Loyola. 30 de enero de 2002. Mayoría de cinco votos. Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo en consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la presente tesis.

La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Con base en el panorama indicado, puede afirmarse que la pretendida interpretación, intentada por el partido recurrente, respecto del segundo párrafo, del artículo 191 de la Ley Comicial del Estado, debe entenderse como **restrictiva** y, por ende, no puede validarse para quitar el registro obtenido por la coalición “Juntos para Servir” conformada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, en diversos municipios del Estado de Guanajuato.

Efectivamente, como se verá a continuación, la disposición normativa en estudio, admite, al menos, una interpretación diversa que, a juicio de quien resuelve, favorece los derechos político-electorales de los aspirantes a un puesto de elección popular y, por tanto, la que debe asumir este órgano jurisdiccional colegiado,

en base a los principios rectores del ejercicio de los derechos humanos que se han señalado.

Para demostrar lo anterior, se señala el contenido literal de la porción normativa multicitada:

Artículo 191. Recibida una solicitud de registro de candidaturas por el presidente o secretario del órgano electoral que corresponda, se verificará dentro de los tres días siguientes que se cumplieron con todos los requisitos señalados en el artículo anterior y que los candidatos satisfacen los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución del Estado y en el artículo 11 de esta Ley.

Si de la verificación realizada se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos o que alguno de los candidatos no es elegible, el presidente notificará de inmediato al partido político correspondiente, para que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes subsanen el o los requisitos omitidos o sustituya la candidatura, siempre y cuando esto se realice cuatro días antes de la sesión de registro de candidatos.

(...)

(Lo resaltado no es de origen)

La primer parte del artículo en comento, es clara al derivar el deber de la autoridad administrativa para verificar dentro de los 3 días siguientes, a la solicitud de registro de candidaturas, que se haya cumplido, con la presentación de todos los requisitos establecidos en el artículo 190 de la propia ley comicial local.

Inclusive, la primera parte del párrafo subsecuente, regula con meridiana claridad, las consecuencias que se derivan, cuando en la solicitud de registro, se actualiza la falta de la totalidad de requisitos exigidos por la ley, en específico, se trata de la formulación de un requerimiento por 48 horas, para que se subsanen tales omisiones.

Sin embargo, debe decirse que la parte *in fine*, del mencionado párrafo, que regula: "...el presidente notificará de

inmediato al partido político correspondiente, para que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes subsanen el o los requisitos omitidos o sustituya la candidatura, siempre y cuando esto se realice cuatro días antes de la sesión de registro de candidatos”; a juicio de quien resuelve, no es tan clara, como las anteriores.

Ello, porque el pronombre “esto” usado por el legislador, no deriva en forma fehaciente, lo que debe verificarse 4 días antes de la sesión de registro de candidatos es decir, si se trata de la prevención que efectúa la autoridad electoral para subsanar requisitos; o bien, la anticipación con la que el partido prevenido debe dar cumplimiento a lo ordenado; o sustituir alguno de sus candidatos.

Por ello, en atención a la interpretación no restrictiva que debe darse a las normas que, como la presente se relaciona con la posibilidad de vedar o hacer efectivo el derecho a ser votado de diversos ciudadanos propuestos por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza que integran la coalición “Juntos para Servir”, debe considerarse, que el acto previsto por el legislador que debe efectuarse al menos 4 días antes de la sesión del Consejo es, el requerimiento que, en su caso, efectúe la autoridad administrativa electoral, a quien incumpla con alguno de los requisitos para el registro de sus candidatos, o bien, la sustitución de un partido político de alguno de sus candidatos.

Dichas interpretaciones, se estiman más apegadas a la teleología de la norma, pues de atender a la aplicación del artículo 191, que pretende el Partido Acción Nacional, sería tanto como

conceder que algunos plazos y disposiciones contenidas en otros preceptos de la ley electoral, son en realidad una falacia, lo que resulta inaceptable.

Como ejemplo de lo anterior, se cita la referencia del instituto político recurrente, en donde asevera que, aun habiéndole concedido a la coalición “Juntos para Servir” conformada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, el plazo legal de 48 horas para que subsanara las inconsistencias de sus planillas de candidatos presentados, no podía hacer uso de dicho término, a efecto de evitar que el cumplimiento se diera ya, dentro de los 4 días que antecedían a la celebración de la sesión de registros por parte del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

De aplicarse tal interpretación, implicaría una carga desproporcional, desmedida, irracional e injustificada para el postulante, pues no tendría la misma oportunidad que los demás de cumplir, en igualdad de circunstancias y de manera ordinaria, con el requerimiento que le fuera formulado, por lo que tal interpretación debe desestimarse al ser contraria al principio *pro persona*, establecido en el artículo 1 de la Constitución Federal, conforme al cual se ha señalado, que las normas instrumentales que prevén limitaciones al ejercicio del derecho a ser votado, como cualquier otra norma restrictiva de derechos, deben ser interpretadas de manera restringida.

Al respecto, debe afirmarse que al existir en la Ley, en forma expresa, la obligatoriedad para el órgano electoral competente, de requerir a los partidos políticos, subsanar las deficiencias

detectadas en sus registros, mediante el otorgamiento de un plazo de 48 horas para cumplirlo; entonces, no se puede restringir y menos aún anular esa prerrogativa del partido político requerido, por más que se pretenda fincar ello en diverso texto de la Ley, más aun, cuando se pretende interpretar, como se ha visto en este caso, en consideraciones restrictivas.

Por tanto, debe insistirse que el argumento impugnativo del recurrente, que se basa en la interpretación del segundo párrafo del artículo 191 de la ley electoral local, no encuentra un soporte eficaz y no puede validarse por ser restrictivo.

Con base en lo anterior, se considera que no puede afectarse el derecho fundamental, a ser votado, que tienen los ciudadanos propuestos por la coalición “Juntos para Servir” que integraron los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, para contender en la elección de diversos municipios del Estado.

Esto, si consideramos que en el registro solicitado, el instituto político demandado, se apegó a las reglas concedidas por la normatividad electoral; y al plazo que le dio la autoridad administrativa para subsanar las irregularidades de sus registros, por lo que ninguna conducta le es reprochable; además de que no puede justificarse, la negativa de registro solicitada por el Partido Acción Nacional.

Al respecto, se refiere, que en el resultando sexto del acuerdo impugnado, la autoridad electoral razonó que las solicitudes de registro de candidatos por parte de la coalición

flexible conformada por los institutos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza se presentaron el día 26 de marzo de 2015, (foja 20 vuelta del expediente), esto es, dentro del plazo previsto por el artículo 188, fracción IV de la ley electoral local.

Luego, los requerimientos efectuados por la autoridad electoral, fueron cumplidos en los casos donde aparece el dato respectivo, oportunamente, por el instituto político integrante de la coalición, es decir, dentro de las 48 horas concedidas por la autoridad administrativa electoral, en base a la disposición de la propia ley comicial, lo que se observa en la tabla que se expone a continuación:

Municipio	Oficio	Fecha de Recepción	Hora de recepción	Fecha cumplimiento	Hora cumplimiento
Apaseo el Grande Partido Revolucionario Institucional	143	29/03/15	23:05	31/03/15	06:10 pm
Atarjea Partido Nueva Alianza	132	29/03/15	23:05	31/03/15	23.00
Celaya Partido Revolucionario Institucional	126	29/03/15	23:19	31/03/15	18:25
Coroneo Partido Revolucionario Institucional	068	29/03/15	23:19	NO APARECE	NO APARECE
Coroneo coalición Partido Verde Ecologista de México	166	29/03/15	11:04 pm	31/03/15	19:20
Coroneo Partido Nueva Alianza	167	29/03/15	23:05	31/03/15	18:03
Guanajuato Partido Nueva	082	29/03/15	23:05	31/03/15	17:55

Alianza					
Guanajuato Partido Verde Ecologista de México	165	29/03/2015	11:03 pm	31/03/15	19:21
León Partido Revolucionario Institucional	131	29/03/15	23:19	31/03/15	06:10 pm
M. Doblado Partido Nueva Alianza	144	29/03/15	23:05	31/03/15	17:50
San Miguel de Allende Partido Nueva Alianza	112	29/03/15	23:05	31/03/15	17:55

Como puede observarse, de los datos obtenidos de la tabla inserta, puede comprobarse el cumplimiento del partido postulante, a los plazos legales, para el cumplimiento de las prevenciones que le fueron realizadas.

Ahora bien, suponiendo sin conceder que sí pudiera darse al artículo 191 multicitado la interpretación que pretende el recurrente, para establecer que el cumplimiento de las prevenciones se dio sin respetar los 4 días anteriores a la sesión de registros por parte del Instituto Electoral del Estado, y que ello redunde en la negativa del registro solicitado por la coalición “Juntos para Servir”, no puede soslayarse que en una gran medida, el retraso se debió a la tardanza de la autoridad administrativa al efectuar el requerimiento.

Por tanto, resulta patente, que ningún caso es censurable alguna omisión o transgresión de la normatividad vigente por parte del instituto político demandado, y por ende, no puede

irrogarle perjuicio, la resolución del presente asunto, por lo que se corrobora de esta forma, la improcedencia del agravio en estudio.

II.- El recurrente plantea que las sustituciones realizadas por el instituto político postulante en los cumplimientos a los requerimientos formulados, devienen igualmente extemporáneos al ser contrarios a lo previsto en la fracción I del artículo 194 de la ley electoral local que señala:

Artículo 194. Para la sustitución de candidatos, los partidos políticos lo solicitarán por escrito al Consejo General, respetando las reglas de paridad y observando las siguientes disposiciones:

I.- Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos podrán sustituirlos libremente;

...

Lo anterior, pues de la causa de pedir del demandante, se advierte con meridiana claridad que considera que las sustituciones se llevaron a cabo con posterioridad a que concluyó el plazo para la presentación de solicitudes de registro de candidatos, ya había fenecido la posibilidad de realizar sustituciones de manera libre, por lo que tenía que mediar renuncia.

Esto se advierte de los fragmentos de su escrito recursal que para mayor claridad se insertan a continuación:

“Además, por lo que toca a la sustitución de candidatos postulados, es aplicable en lo que al caso interesa, lo dispuesto en el artículo 194, fracción I de la Ley electoral en cita, que dispone el tiempo en que esta se puede válidamente darse, **sin que para ello tenga que mediar renuncia de los candidatos, por estar precisamente en la fase de registro de los mismos.** Se transcriben en lo conducente los artículos precitados.

...

«Artículo 194. Para la sustitución de candidatos, los partidos políticos lo solicitarán por escrito al Consejo General, respetando las reglas de paridad y observando las siguientes disposiciones:

I.- Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos podrán sustituirlos libremente;

II a III...

Sólo se podrán sustituir... »

La extemporaneidad en el cumplimiento de requisitos y la indebida sustitución de candidatos, atenta contra el sistema de registros que se tiene contemplado en la Ley electoral local, y que de manera puntual dispone los requisitos, etapas y plazos a los que los registros deben ajustarse, quedando a los partidos políticos y a las coaliciones la libertad de decidir el momento en que quieran presentar sus solicitudes de registro de candidaturas, con las consecuencias que trae y debe traer consigo el que decidan hacerlo hasta el último día en que la ley dispone puedan éstos realizarse.”

El anterior planteamiento, deviene igualmente **infundado**.

En primer término, resulta necesario clarificar que la fracción I, artículo 194 de la ley electoral local, establece un lapso de tiempo en el que se podrán realizar –libremente- sustituciones de candidatos, y lo refiere de la siguiente manera: **“dentro del plazo establecido para el registro”**

Sin embargo, ello no significa que la norma se deba limitar única y exclusivamente a una de las etapas del registro de candidatos, que es la que corresponde al periodo para presentar solicitudes de registro y que en el caso de ayuntamientos se estableció del 20 al 26 de marzo del año de la elección.

En todo caso, debe entenderse que el plazo para la sustitución libre de candidatos corre desde el inicio de la etapa de registros, hasta el vencimiento del plazo con que cuentan los postulantes para subsanar omisiones o substituir candidatos.

Lo anterior es así, pues tal disposición normativa se debe interpretar de manera armónica y sistemática con los artículos 188, fracción IV y 191 del ordenamiento normativo en cita, que rigen el procedimiento de registro.

De acuerdo a tal interpretación, la frase *“plazo establecido para el registro de candidatos”* debe ser considerada como un periodo de tiempo que no se limita exclusivamente a la etapa de presentación de solicitudes, sino que debe incluirse,

necesariamente, el plazo con que cuenta la autoridad administrativa electoral para revisar el cumplimiento de los requisitos de registro y de elegibilidad; el tiempo necesario para notificar los requerimientos a los postulantes; y, finalmente, el lapso de 48 horas otorgado a éstos para subsanar el o los requisitos omitidos, o bien, para sustituir a los candidatos.

Incluso el propio artículo 191, párrafo segundo de la ley comicial local posibilita de manera expresa a los postulantes para que realicen las sustituciones que estimen pertinentes.

Por tanto, si como ocurrió, en el caso concreto, las sustituciones de candidatos formuladas a la coalición “**Juntos para Servir**” conformada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, se realizaron dentro del plazo de 48 horas concedido por la autoridad administrativa electoral, se deben considerar efectuadas en tiempo, en términos de lo señalado por los dispositivos normativos en cita, con independencia de que haya mediado o no renuncia.

Máxime, si se considera que de los propios escritos de cumplimiento presentados y agregados a los autos, se advierte que, en todos aquellos donde operaron las sustituciones, se señaló el acompañamiento de la renuncia de los nuevos candidatos, elemento adicional, que confirma lo infundado de los planteamientos de lesión jurídica del accionante.

Documentales que en términos de lo dispuesto por el artículo 415 de la ley electoral en vigor, tienen valor probatorio pleno, no obstante su calidad de documentos privados, al no existir prueba en el sumario que contradiga su contenido.

De acuerdo a lo expuesto, fundado y motivado lo procedente es **confirmar** el acuerdo **CGIEEG/033/2015**, dictado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el día 4 de abril de 2015, mediante el cual se aprobó el registro de las planillas de candidatos, postulados por la coalición “Juntos para Servir” que forman los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, para integrar los ayuntamientos de Apaseo el Grande, Atarjea, Celaya, Coroneo, Guanajuato, Irapuato, León, Manuel Doblado, Pénjamo, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, y Tierra Blanca en la elección a celebrarse el 7 de junio del año en curso.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 31, párrafo décimo tercero de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 163 fracción I, 164 fracción XIV y 166, fracciones I, II, y XIV y 396 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, se

R E S U E L V E:

PRIMERO.- El Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, resultó competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión.

SEGUNDO.- Se confirma el acuerdo **CGIEEG/033/2015**, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el día 4 de abril de 2015, en términos de lo establecido en el considerando octavo de esta resolución.

Notifíquese personalmente la presente resolución al promovente, en el domicilio que señaló para tal efecto; lo mismo que al partido político tercero interesado; mediante oficio al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y por estrados a cualquier diverso interesado en el presente asunto.

Igualmente publíquese la presente determinación en la página electrónica www.teegto.org.mx, en los términos de lo establecido por el artículo 109 del Reglamento Interior de este Tribunal.

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, por unanimidad de votos de los ciudadanos Magistrados licenciados **Gerardo Rafael Arzola Silva, Ignacio Cruz Puga, y Héctor René García Ruíz**, los que firman conjuntamente, siendo Magistrado instructor y ponente el primero de los nombrados, actuándose en forma legal ante el Secretario General, licenciado Alejandro Javier Martínez Mejía.- Doy Fe.

CUATRO FIRMES ILEGIBLES.- DOY FE.